



UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

TRABAJO FIN DE ESTUDIOS

Título

La Codificación Mercantil en España

Autor/es

REBECA IBARROLA RAMÍREZ

Director/es

SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ

Facultad

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Titulación

Grado en Derecho

Departamento

DERECHO

Curso académico

2018-19



La Codificación Mercantil en España, de REBECA IBARROLA RAMÍREZ
(publicada por la Universidad de La Rioja) se difunde bajo una Licencia Creative
Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los
titulares del copyright.



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

TRABAJO FIN DE GRADO

**LA CODIFICACIÓN MERCANTIL EN ESPAÑA
THE MERCANTILE CODIFICATION IN SPAIN**

REBECA IBARROLA RAMÍREZ

TUTORES

M^a CARMEN SÁENZ BERCEO

SERGIO PÉREZ GONZÁLEZ

GRADO EN DERECHO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

AÑO ACADÉMICO 2018 / 2019

Resumen

El presente trabajo pretende realizar un breve estudio acerca de las principales normativas mercantiles.

En primer lugar, nos aproximaremos al concepto de código y de codificación para poder entender el proceso de Codificación Mercantil.

En segundo lugar, estudiaremos la historia, las características y el contenido del Código de Comercio de 1829, el primer gran texto en nuestra historia.

En tercer lugar, nos detendremos en la Ley de 1830 de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio y la analizaremos.

Posteriormente, haremos un repaso de las normativas existentes hasta la promulgación del Código de Comercio de 1885.

Finalmente, haremos lo propio con el Código de Comercio de 1885, que sigue vigente con las modificaciones necesarias.

Abstract

The present elaboration pretends to be a brief study about the main mercantile regulations.

Firstly, we will approach the concept of code and codification in order to understand the process of mercantile codification.

In second place, the history, the characteristics and the content of the Commercial Code of 1829, the first great one in our history.

Thirdly, we will stop at the 1830 Law of Prosecution on Businesses and the Causes of Commerce focusing on their analysis.

Afterwards, a review of the regulations up to the promulgation of the Commercial Code of 1885.

And last but not least, the Commercial Code of 1885 is going to be studied as Mercantile one has been exposed, the one that is still in force with the needed updates.

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
1. 1. ¿Qué es un código?	1
1. 2. ¿Qué es la codificación?	2
1. 2. 1. Concepto de codificación	2
1. 2. 2. Fundamento de codificación	2
1. 2. 3. El nacimiento de la codificación	3
1. 2. 4. La codificación en España	4
2. CODIFICACIÓN MERCANTIL	8
2. 1. El Código de Comercio de 1829	8
2. 1. 1. Origen del Código de Comercio de 1829	9
2. 1. 2. Caracteres del Código de Comercio de 1829	12
2. 1. 3. Contenido del Código de Comercio de 1829	13
2. 2. Ley de 1830 o Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio	15
2. 2. 1. Origen de la Ley de 1830 o Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio	15
2. 2. 2. Características de la Ley de 1830 o Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio	17
2. 2. 3. Contenido de la Ley de 1830 o Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio	18
2. 3. Acontecimientos hasta el Código de Comercio de 1885	19
2. 3. 1. Primer intento de reforma del Código de Comercio de 1829	19
2. 3. 2. Segundo intento de reforma del Código de Comercio de 1829	20
2. 3. 3. Proyectos de la tercera Comisión (creada el 24 de octubre de 1838)	21
2. 3. 4. Proyectos de la cuarta Comisión (creada el 26 de agosto de 1839)	21
2. 3. 5. Comisión encargada de revisar las Leyes Mercantiles	22
2. 3. 6. Abolición de la Jurisdicción Especial y los Tribunales de Comercio	23
2. 3. 7. Legislación Mercantil entre 1830 y 1880	23
2. 4. El Código de Comercio de 1885	24
2. 4. 1. Origen del Código de Comercio de 1885	24
2. 4. 2. Caracteres del Código de Comercio de 1885	26
2. 4. 3. Contenido del Código de Comercio de 1885	27
3. CONCLUSIONES	34
4. BIBLIOGRAFÍA	36

1. INTRODUCCIÓN

El comercio es, hoy en día, un aspecto u elemento muy importante en la vida de casi todas las personas puesto que, ¿quién no realiza una transacción mercantil alguna vez a lo largo de toda su vida? Es por ello que, debido a los avances producidos en el ámbito mercantil, también se ha necesitado de un avance normativo.

El presente Trabajo Fin de Grado tiene por objeto el estudio de la evolución que ha experimentado la regulación del Derecho Mercantil en España, haciendo hincapié en los tres grandes textos normativos que se elaboran a partir del Proceso Codificador: el Código de Comercio de 1829, la Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio de 1830 y el Código de Comercio de 1885, que todavía sigue en vigor, aunque con las matizaciones correspondientes a las necesidades que la sociedad ha ido requiriendo y, por ende, reclamando, en los distintos momentos históricos.

El punto de partida lo encontramos en el Proceso Codificador. Los aspectos relacionados con el comercio se transmitían de padres a hijos de manera oral en los primeros tiempos, lo que se conocía como “costumbres del mar” pero, cuando el comercio adquiere verdadera relevancia, es necesario un texto que recoja las diferentes situaciones que se puedan dar en el tráfico mercantil, de ahí la legislación especial, los Consulados y sus Ordenanzas, etc. Y, tras no pocas vicisitudes, finalmente, el primer Código de Comercio entra en vigor en 1829.

La Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio de 1830 viene a completar el Código anteriormente mencionado y se ocupa de regular los distintos procedimientos mercantiles y todo lo que les rodea.

Por último, tenemos el Código de Comercio de 1885, un código menos extenso que el anterior ya que, parte de su contenido, está ahora regulado o normativizado en leyes independientes, pero que nos es imposible pasar por alto o dejar de lado puesto que es el que sigue vigente actualmente y por el cual regimos nuestro tráfico mercantil.

Ahora bien, como hemos dicho, en la evolución histórico – jurídica del Derecho Mercantil, ha sido determinante, como para otras ramas del Derecho (por ej, la civil, la penal...), el Proceso Codificador, que comenzará en los inicios del siglo XIX.

1. 1. ¿QUÉ ES UN CÓDIGO?

Para comprender el fenómeno de la Codificación Mercantil tenemos que hacer referencia tanto al concepto de código como al de codificación. A lo largo de nuestra historia, nos hemos encontrado con numerosas acepciones de dichos términos provenientes de diferentes juristas y, a continuación, expondremos algunas de ellas.

«Desde una perspectiva externa y formal se denomina código a cualquier tipo de manuscrito en forma de libro, con hojas cosidas en bloque compacto, según un sistema que en su origen reemplazó al más antiguo de los rollos de papiro y pergamino»¹.

«Desde un punto de vista jurídico y en razón del contenido, código es un libro de leyes». Se discute, por tanto, si código es una recopilación de leyes antiguas, es decir, una recopilación de leyes ya existentes (como por ejemplo, el Codex Gregorianus) o si, por el contrario, es una reelaboración de esas leyes siguiendo unos criterios propios de ordenación (como por ejemplo, los Fueros de Aragón se transforman en el Código de Huesca). Se denominan, a veces, también códigos a las grandes recopilaciones (como por ejemplo, la Novísima Recopilación de las Leyes de España de 1805).

Pero, el código como recopilación no es un único texto normativo, pues está constituido por un conjunto de leyes elaboradas por diversos autores o legisladores y que además, versa sobre distintas materias. Por esta razón, se trata de un texto largo, para nada claro y de difícil interpretación. El hecho de que cada ley esté redactada de una forma dificulta la labor del intérprete y de cualquiera que se acerque a la misma. Supusieron un relativo avance normativo en su época pero tenían grandes carencias.

Por ello, a partir del siglo XVIII, ésta concepción de “código” cambia, deja de recoger el derecho antiguo y da paso a otra que sigue vigente actualmente. En este sentido, «código es la regulación sistemática de una determinada rama del derecho, de acuerdo con los principios que sus redactores estiman oportunos, en un libro ordenado en capítulos y artículos entre sí relacionados e interdependientes unos de otros».

El concepto que se afianza en Europa, también a partir del siglo XVIII y que continúa hasta nuestros días, es el siguiente: «un código es una ley de contenido homogéneo por razón de la materia, que de forma sistemática y articulada, expresada en un lenguaje preciso, regula todos los problemas de esa materia unitariamente acotada»².

Esta concepción contrasta fuertemente con la que hasta entonces se había estado utilizando. Así, el código como ley es un único texto normativo, está elaborado por uno o varios autores al mismo tiempo y versa sobre una única materia. Además, se trata de un texto más o menos corto pero de contenido homogéneo, lo que facilita en gran medida la labor de aquellos que tienen que interpretarlo a la hora de solucionar los conflictos ya que, se encuentra ordenado y articulado. Es por ello que, sus señas de identidad son la claridad, la coherencia y también, el lenguaje preciso.

Para Pio Caroni, el código aspira a lograr la plenitud, a resumir y agotar todo el universo jurídico, para así resolver todos y cada uno de los conflictos jurídicos. Pero

¹ ESCUDERO, J. A., *Curso de Historia del Derecho: Fuentes e Instituciones Político – Administrativas*, tercera edición, Madrid, 2003, pág. 885. Las definiciones que siguen son del mismo autor y obra.

² TOMÁS Y VALIENTE, F., *Manual de Historia del Derecho Español*, cuarta edición, Editorial Tecnos, Madrid, 1983, págs. 465 a 467.

también puede ser considerado como la fuente jurídica por excelencia, aquella que se tiene en cuenta en primer lugar y que en algún caso nos remite a otras normas jurídicas³.

1. 2. ¿QUÉ ES LA CODIFICACIÓN?

1. 2. 1. Concepto de codificación

Una vez entendido el concepto de código, nos detendremos en el concepto de codificación. Y, en este sentido, también nos encontramos con varias definiciones.

Por ejemplo, para José Antonio Escudero, «por codificación, hay que entender, de forma genérica, la tarea de realizar cualquier tipo de código»⁴.

Para Francisco Tomás y Valiente, «por codificación entendemos, en un sentido amplio, el proceso histórico que conduce a la elaboración de los diversos códigos»⁵. Incluyendo en dicho fenómeno, la elaboración de unos códigos relativos a diferentes materias, como por ejemplo, la civil, penal, mercantil y procesal.

Es preciso señalar aquí el cualificado punto de vista de Pio Caroni, que sostiene que «el discurso de la codificación, más pronto que tarde, convoca y articula los grandes temas de la historia jurídica, los que el investigador descubre a medida que intenta profundizar en él»⁶, de ahí la importancia de este “proceso” en nuestra historia.

Al ser consciente de la importancia de este proceso me ha parecido interesante estudiarlo con más profundidad, centrándome en el ámbito mercantil, que tantísima relevancia ha tenido y tiene en todas las sociedades y tiempos.

1. 2. 2. Fundamento de la codificación

Podemos decir que el fenómeno de la codificación encuentra su razón de ser en el racionalismo jurídico, es decir, en la existencia de unas leyes deducidas lógicamente, válidas para todo el mundo, independientemente de las circunstancias propias de cada individuo, basadas en la razón y de una validez intemporal. Esta idea se le atribuye a Leibnitz, jurista y diplomático de gran prestigio, pero a la hora de hablar de la divulgación de dicha idea, tenemos que hablar de Christian Wolff, un discípulo de Leibnitz y a la vez de Descartes, con quienes compartía el racionalismo jurídico.

³ CARONI, P., *Lecciones de Historia de la Codificación*, edición de Adela Mora Cañada y de Manuel Martínez Neira, Universidad Carlos III, 2013, pág. 29.

⁴ ESCUDERO, *op. cit.*, pág. 885.

⁵ TOMÁS Y VALIENTE, *op. cit.*, págs. 467 a 476.

⁶ CARONI, *op. cit.*, pág. 196.

Tras la caída del Antiguo Régimen, la sociedad necesita de una nueva regulación u ordenación que se adecúe a las circunstancias del nuevo Estado. Es por ello que, el concepto de “código” que se había estado utilizando hasta entonces, no servía ya que carecía de sentido para esa sociedad. El nuevo Estado necesitaba de una regulación que se correspondiera con la realidad del momento. El derecho había de ser igual para todos y servir a lo largo del tiempo, ya que se pretendía dotar de cierta igualdad y seguridad jurídica a la sociedad.

Un ejemplo de ello lo encontramos en el Código Civil francés de 1804 en el que se propuso el siguiente encabezado: «existe un Derecho universal, inmutable, fuente de todas las leyes positivas, y que no es otra cosa sino la razón natural, que gobierna a todos los hombres»⁷.

El ordenamiento jurídico de un país se recogía en los códigos y también en la Constitución, si es que la había. Por ello, se pensaba que la solución a cualquier tipo de problema que pudiera suscitarse estaba contenida en los códigos. Y de haber alguna cuestión que no estuviera resuelta de forma explícita, se creía que podía deducirse a partir del derecho que contenía ese código y de sus numerosos artículos y disposiciones.

Los códigos son relevantes en lo que respecta a la seguridad jurídica y así, Jeremías Bentham escribió en 1802: «el Derecho escrito es el único que puede merecer en verdad el nombre de ley. El Derecho no escrito es propiamente hablando tan solo un Derecho conjetural, una ficción de ley. En la base de la ley escrita hay algo seguro, manifiesto: hay un legislador, hay una voluntad, hay una expresión de voluntad y se conoce perfectamente la época de su nacimiento. El Derecho no escrito no tiene nada de eso. Se desconoce su origen, crece continuamente, nunca puede estar terminado y se modifica sin que nadie se aperciba de ello... La gran utilidad de la ley es su certidumbre»⁸, y la de los Códigos que recogen la misma.

1. 2. 3. *El nacimiento de la codificación*

La codificación, aplicada a los cuatro sectores del ordenamiento jurídico más relevantes, esto es, derecho civil, penal, mercantil y procesal, surge en la Europa del siglo XVIII en los territorios de Baviera, Prusia y Austria, pero también en la Toscana y Lombardía. Un poco más tarde, a principios del siglo XIX, se puede vislumbrar en Francia, cuando entra en juego la figura de Napoleón y su famoso Código Civil.

⁷ TOMÁS Y VALIENTE, *op. cit.*, pág. 470.

El Código Civil francés, más conocido como el Código de Napoleón, fue promulgado el 21 de marzo de 1804 y entró en vigor el 24. La Comisión redactora definitiva de dicho Código la integraban los grandes jurisconsultos: Jacques de Maleville, Jean Etienne Marie Portalis (expertos en el Derecho Escrito), Félix Julien Jean Bigot de Préameneu y François Denis Tronchet (expertos en el Derecho de Costumbres). http://www.cronotecagenealogica.com/gestac_cod_civ.html (Consultado el 1/10/2018).

⁸ *Ibíd.*, pág. 471.

Para hacer frente a la posible arbitrariedad judicial se pretende crear un código con un derecho comprensible, sencillo y fácil de aplicar por el juez, es decir, un derecho que no tiene que ser pensado o interpretado, solo aplicado de forma casi mecánica, dada su claridad. De forma que se deja poco margen de apreciación al juez para decidir algo que no esté contenido en el código ya que discrecionalidad puede ser sinónimo, en ocasiones, de arbitrariedad.

Por último, tenemos que decir que los códigos, al estar basados o fundados en la razón universal, estaban pensados para que pudieran tener virtualidad en cualquier país, no solo en el país de origen. Y así ocurrió en España, que tomó el Código Civil francés como modelo a la hora de elaborar el código español, pero también lo hicieron otros países del continente europeo, como por ejemplo Italia o Alemania.

1. 2. 4. *La codificación en España*

En nuestro país, el fenómeno de la codificación fue tardío, tanto es así que una vez aprobado y promulgado el Código Civil en Francia, en España se continuó con la técnica recopiladora. La Novísima Recopilación de las Leyes de España es promulgada en 1805, a la que al margen de su mayor o menor claridad, se le acusó, y con razón, de que nacía obsoleta y que estaba fuera de tiempo. Con ella, se pretendió resolver las dificultades en la aplicación de la norma, quedando lejos de la solución codificadora.

Durante los años 1809 – 1810, la Junta Suprema Central⁹ celebró una consulta, conocida posteriormente como “consulta al país”, en la que formuló diversas preguntas a las autoridades y a los organismos más importantes del territorio (como por ejemplo, Obispos, Ayuntamientos, Audiencias, etc.). Entre ellas destaca, en relación al tema que nos ocupa, la de cuáles serían los medios más adecuados a utilizar para lograr una legislación mejor y adaptada a las circunstancias o necesidades de la época.

Para unos, como el Obispo de Orihuela¹⁰, no era necesaria una reforma o una modificación de la legislación ya que ésta era «muy justa, arreglada y santa»¹¹ y lo que debería hacerse era una especie de recopilación de la misma. Para otros, como el

⁹ La Junta Suprema Central fue un órgano que tuvo su origen en las distintas provincias del país y que empezó a funcionar como tal en septiembre de 1808. Aglutinó así tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo durante la ocupación napoleónica del territorio español.

La Junta Suprema Central fue el órgano de expresión centralizado de las diferentes Juntas, que con carácter evidentemente defensivo, habían ido surgiendo en la Península. Estaba compuesta por dos diputados de cada provincia de España, considerándose que era representante de todos los españoles, del pueblo español.

<https://espana.leyderecho.org/junta-central/> (Consultado el 03/10/2018).

¹⁰ «La opinión del obispo Francisco Antonio Cebrián y Valdés y la del cabildo de Orihuela reflejan en gran medida la postura del grupo más inmovilista con respecto a la sociedad, frente a los regalistas-jansenistas, que se caracterizaban por la pervivencia de una Iglesia partidaria de los grandes actos de piedad, aliada con el poder temporal, que define sus privilegios y que desea decidir en la vida pública». LA PARRA LÓPEZ, E., *Privilegios estamentales y deforma del clero en la crisis del Antiguo Régimen. (La jerarquía de la diócesis de Orihuela ante la convocatoria de las Cortes de Cádiz)*, pág. 223.

¹¹ TOMÁS Y VALIENTE, *op. cit.*, pág. 484.

Ayuntamiento de Yecla, primaba la elaboración de una Constitución política y de un Código Criminal. Y, una vez elaborados ambos textos, estaba a favor de la elaboración de un Código Civil pero de contenido no muy diferente al de Las Partidas, por lo que, en realidad, no se estaría elaborando un código verdadero en el sentido en el que lo podemos entender actualmente.

Y para otros, era necesaria la elaboración de un código que se adaptase a las circunstancias o prioridades del momento histórico en el que se estaba viviendo y que, además, recogiera toda la legislación para que no hubiera ninguna situación que quedase sin regular o que no tuviera cierto amparo legal. También creían que mientras durase la elaboración del nuevo código era necesaria la elaboración de una recopilación que contuviera todas las leyes vigentes. En esta línea nos encontramos con la Audiencia de Galicia o el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Este último también estaba a favor de la elaboración de un código claro y sencillo, dejando fuera el derecho en desuso.

La gran variedad de opiniones parecía conducir a la idea de que España no estaba preparada para la elaboración de un código, al menos no lo estuvo hasta la elaboración de la Constitución de Cádiz de 1812.

En este aspecto destaca la figura de Espiga y Gadea¹², que pidió la reforma de la legislación, pues consideraba que aunque había leyes muy buenas y completas, también había leyes muy antiguas, enrevesadas y nada claras. Por ello, no es que estuviera a favor de la elaboración de un código en sentido estricto, pero sí de una modificación y selección de esa legislación, que llevaría a la elaboración, en definitiva, de un verdadero código. Para dicha reforma consideraba necesario el nombramiento de unas comisiones y Espiga explicitaba lo siguiente: «habiendo sido convocadas las Cortes generales y extraordinarias, no solo para formar una Constitución, sino también para reformar nuestra legislación, y conteniendo ésta diversas partes que exigen diferentes emisiones, pido que se nombre una para reformar la legislación civil, otra para la criminal, otra para el sistema de Hacienda, otra para el comercio y otra para un plan de educación e instrucción pública»¹³.

Las diversas opiniones coincidían en que era necesaria la elaboración de una Constitución que precediera a la redacción de los distintos códigos y una vez elaborada y aprobada la misma, el artículo 258 de la Constitución de 1812 disponía: «el Código civil y criminal y el de comercio, serán unos mismo para toda la Monarquía, sin

¹² José Espiga y Gadea (1758 - 1824) fue diputado de las primeras Cortes, canónico de la Catedral de Lérida, arzobispo, capellán real y auditor de la Rota. Perteneció a la comisión encargada de elaborar el Proyecto de Constitución Española, interviniendo de manera muy activa. Destacado liberal y partidario del sufragio censitario.

<http://dbe.rah.es/biografias/49277/jose-espiga-y-gadea> (Consultado el 4/10/2018).

¹³ Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Serie histórica. Sesión del día 9 de diciembre de 1810. Número 74, pág. 153.

perjuicio de las variaciones, que por particulares circunstancias podrán hacer las Cortes»¹⁴. Por lo tanto, se pasó a abordar la tarea codificadora de forma efectiva.

Es sabido que la vuelta de Fernando VII daría al traste con todo ello y no fue hasta los años 1820 – 1823, durante el trienio liberal, cuando se volvió a poner en marcha el Proceso Codificador y, en definitiva, lo establecido en el artículo 258 de la Constitución. En un principio, a la hora de elaborar las Comisiones de Codificación, se discutió si éstas debían ser exclusivamente parlamentarias o mixtas, es decir, incluyendo a diversos especialistas en diferentes materias, aunque no fueran diputados. Y, aunque se optó por la segunda opción, la idea no tuvo mucho éxito, así que una vez restaurada la Constitución de 1812 se optó por el primer modelo, dejando fuera a los expertos, que podrían ser consultados en caso de necesidad¹⁵.

En estos tres años, se aprobó un Código Penal (en 1822), se elaboró una pequeña parte del Código Civil y un Código Procesal Penal, que quedó pendiente de aprobación.

¹⁴ La Constitución de 1812 prevé la elaboración de tres códigos: el Civil, el Criminal y el de Comercio. El citado artículo guarda relación con la Carta o Constitución de Bayona ya que contiene sendos artículos que hacen referencia a estos tres mismos códigos, a saber: el artículo 96 dice que, “las Españas y las Indias se gobernarán por un solo Código de leyes civiles y criminales” y el artículo 113 dice que, “habrá un solo código de comercio para España e Indias”, en correlación con el artículo 258 de la Constitución. Constitución de 1812, Congreso de los Diputados.

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-de-bayona-6-de-julio-1808/html/437fe325-fb92-48b7-a963-a36d6a8fd6af_2.html (Consultado el 4/10/2018).

¹⁵ IÑESTA PASTOR, E., *La Comisión General de Codificación (1843 – 1997). De la Codificación Moderna a la Descodificación Contemporánea*, 2013, pág. 69.

2. CODIFICACIÓN MERCANTIL

Después de esas pequeñas notas para introducir y situar el Proceso Codificador, vamos a analizar con más detalle la Codificación Mercantil, objeto de estudio del presente Trabajo Fin de Grado.

Ya desde la etapa medieval el intercambio comercial y su gran importancia económica para los entes públicos y privados, había propiciado una reglamentación especial y una jurisdicción específica: los Tribunales especiales y los Consulados¹⁶.

Sin embargo, no será el Código de Comercio el primero en ver la luz, como ya adelantamos, será el Código Penal. Ahora bien, el Código de Comercio será también fruto de esa iniciativa y empuje que se produjo en el trienio liberal gracias al cambio político y a lo establecido en la Constitución de Cádiz. Así, será en 1829 cuando ve la luz el primer Código de Comercio, influenciado por el Código Civil francés de 1807, las Ordenanzas de Bilbao de 1737¹⁷, el Derecho Castellano y, la Novísima Recopilación de las Leyes de España de 1805.

2. 1. EL CÓDIGO DE COMERCIO DE 1829

A continuación, nos centraremos en el Código de Comercio de 1829, el primero. Estudiaremos, a grandes rasgos, su origen, composición, caracteres y contenido.

¹⁶ Desde mediados del siglo XIII aparece en los territorios mediterráneos una jurisdicción especial para los asuntos mercantiles. Además, en los años finales de esa centuria y en los centrales de la siguiente, surgen en Valencia, Barcelona y Mallorca unos tribunales mercantiles, los Consulados, que confían la resolución de los litigios comerciales a sus propios jueces, llamados “cónsules de mercaderes”.

ESCUADERO, *op. cit.*, pág. 596.

Según la Real Academia de la Lengua Española, un consulado es el “tribunal de comercio que juzgaba y resolvía los pleitos de los comerciantes de mar y tierra”.

¹⁷ El Consulado de Bilbao existía ya en el siglo XV, como una institución antigua, según una alegación elevada a los Reyes Católicos, los cuales confirmaron y juraron los privilegios, las franquezas, libertades y ordenanzas de dicho Consulado. Estas ordenanzas debían ser las Ordenanzas del Comercio de Bilbao, las cuales sufrieron varias modificaciones o actualizaciones a lo largo de su vida.

Las primeras ordenanzas que redactó el Consulado de Bilbao son de mitad del siglo XVI y se conocen como Ordenanzas Antiguas. Fueron sancionadas el 15 de diciembre de 1560 por Felipe II y se organizan en 75 capítulos que hablan de averías, seguros, fletes, contratos a la gruesa, etc.

Fruto de la política renovadora del momento se produjo la modificación de estas ordenanzas. En 1725 se creó una Junta para dicha finalidad y en 1730 fueron aprobadas por el Consulado. Se estructuraron en 27 capítulos y fueron impresas en el Consulado de Bilbao con el nombre de Nuevas Ordenanzas.

En 1735 se creó una Comisión con la finalidad de mejorar la parte técnica de las ordenanzas y en 1737 el proyecto fue aprobado por el Consejo de Castilla. Se denominan Nuevas Ordenanzas de Bilbao. Estas ordenanzas regulan, entre otras cosas, el puerto y las naves, las letras de cambio, la comisión o la quiebra y fueron apreciadas como un Código hasta la promulgación del Código de Comercio de 1829.

LASSO GAITE, J. F., *Crónica de la Codificación Española (Codificación Mercantil 6)*, Ministerio de Justicia, Comisión General de Codificación, Madrid, 1998, págs. 36 a 38.

2. 1. 1. Origen del Código de Comercio de 1829

El desarrollo en cuanto al comercio se refiere y, también la necesidad de unificar el derecho mercantil existente en los diferentes Consulados, hizo que se planteara la necesidad de crear un único Código u Ordenanza General de Comercio.

Hubo numerosos intentos a la hora de realizar un único Código de Comercio, generalmente impulsados por grandes figuras como Jovellanos o Campomanes, así como del Consejo de Indias (en 1815)¹⁸ o las Cortes de Navarra (en 1818)¹⁹. Finalmente y, en parte, gracias al artículo 258 de la Constitución de 1812, en el año 1827, un jurista de gran prestigio y renombre, Pedro Sainz de Andino²⁰, se dirigió a Su Majestad el rey Fernando VII solicitándole permiso para realizar el tan esperado Código de Comercio²¹.

El rey Fernando VII le dio su aprobación y tras la misma, nombró una Comisión, mediante Real Orden de 11 de enero de 1828²², para la redacción del nuevo Código. Don Ramón López Pelegrín fue ponente del Libro I, Don Cesáreo María Sáenz lo fue del Libro II, Don Manuel María Cambronero fue ponente del Libro III, Don Pedro Sainz de Andino lo fue de los Libros IV y V, Don Antonio Porcel fue ponente del Libro VI y Don Bruno Vallarino lo fue del Libro VII. Además, Pedro Sainz de Andino fue nombrado secretario de dicha Comisión y, con la finalidad de cumplir su objetivo, elaboró una lista en la que constaban las diversas materias sobre las que versaría el Código de Comercio a las que llamó “cuadro de materias”.

¹⁸ «El Consejo de Indias fue un organismo creado en 1511 por Fernando el Católico y reformado en 1524 por Carlos I. Este consejo estaba integrado por 21 miembros y entendía en los asuntos de Ultramar con la misma competencia que el Consejo de Castilla en las del reino. Tenía a su cargo la confección de las leyes y cédulas reales que rigieron las Indias. Fue eje de la vida colonial ya que realizó una ingente labor en el aspecto jurídico (como la Recopilación de las Leyes de Indias), en el económico (regulando los destinos de la Casa de Contratación) y en el científico (formando un gran archivo que contiene toda la historia colonial de América). El Consejo de Indias dejó de estar operativo en 1834». Nueva Enciclopedia del Mundo (la primera Enciclopedia Informatizada en España por el Instituto Lexicográfico Durvan), Bilbao.

¹⁹ Durante el Antiguo Régimen, las relaciones de poder entre los monarcas y las élites sociales de sus reinos y provincias, se articularon de diversas maneras. Hoy en día, somos más conscientes de que aquellas reuniones se consolidaron en la Baja Edad Media como “Cortes”.

Las Cortes de Navarra fueron una asamblea política, convocada y presidida por el rey. Estaba compuesta por representantes de los estamentos más privilegiados, esto es, por el estado nobiliario y por el estado eclesiástico, además de por el estado llano y, en ella se decidían los asuntos más relevantes del reino.

FLORISTÁN IMÍZCOZ, A., *Adaptaciones divergentes: las Cortes de Navarra y los États de Navarre (siglos XV - XVIII)*, págs. 178 a 188.

Las Cortes de Navarra solicitaron, en 1818, que fuese servido de formar una Comisión encargada de redactar un Código mercantil general para todo el reino.

LASSO GAITE, *op. cit.*, pág. 61.

²⁰ Pedro Sainz de Andino nació en 1786 y fue jurisconsulto, consejero real, redactor del primer Código de Comercio, senador y académico de la Real Academia de la Historia.

Y, para completar el Código de Comercio escribió el proyecto de Ley Penal sobre los delitos de fraude contra la Real Hacienda en 1830 y se le encargó la formación de la Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio, también en ese mismo año.

<http://dbe.rah.es/biografias/14627/pedro-sainz-de-andino> (Consultado el 6/10/2018).

²¹ RUBIO, J., *Sainz de Andino y la Codificación Mercantil*, Madrid, 1950, pág. 110.

²² Como ya hemos mencionado antes, el deseo de elaborar un Código venía de hace mucho tiempo atrás y como consecuencia de ello, en enero de 1828, se inició la redacción del Código de Comercio de 1829.

<http://www.historiadeespananivelmedio.com/19-9-6-las-reformas-de-1827-1829/>

Además de su participación en el Código de Comercio, Pedro Sainz de Andino elaboró otro índice o proyecto de Código que sería también presentado ante el monarca. Las líneas elaboradas por Pedro Sainz de Andino, a las que debía ajustarse el nuevo Código de Comercio, lo estructuraban en 7 libros (que abarcan desde la definición de Comercio hasta la organización de los Tribunales de Comercio).

El Proyecto de Código de Comercio que finalmente la Comisión presentó ante el rey distaba mucho de las directrices que Pedro Sainz de Andino había manifestado y así, el Proyecto que la Comisión presentó ante el rey se estructuraba de la siguiente manera:

Libro I. Del Comercio en general.

Este libro coincide en mayor o menor medida con el propuesto por Pedro Sainz de Andino, ya que, trata de normativizar, a grandes rasgos, las bases del comercio.

Libro II. De los libros de Comercio.

Gracias a los libros de comercio, los comerciantes dejan constancia o testimonio por escrito y de forma inequívoca de las operaciones mercantiles realizadas por ellos.

Libro III. De los contratos de Comercio.

Este libro coincide con el Libro III propuesto por Sainz de Andino y regula los diferentes contratos existentes en el comercio y los elementos que lo forman.

Libro IV. Del Comercio marítimo.

Es de vital importancia puesto que, al fin y al cabo, el Derecho Mercantil tiene su base en el derecho del comercio marítimo y en todo lo que lo rodea.

Libro V. De las quiebras.

A pesar de que coincide con el Libro V del índice realizado por Sainz de Andino recibe otro nombre, de forma que pasa de llamarse “de las desgracias o las faltas de los comerciantes” a “de las quiebras”, porque regula el proceso de quiebra por completo y porque se consideraba que la mayor desgracia o falta que puede existir en este ámbito, es precisamente, la quiebra.

Libro VI. De los Tribunales de Comercio.

Libro VII. Del modo de proceder en las Causas de Comercio.

A diferencia de la propuesta realizada por Pedro Sainz de Andino que reúne en un único Libro, el VII, la regulación relativa a los Tribunales de Comercio y al modo de proceder en ellos, la Comisión lo hace en dos, en sus Libros VI y VII.

Creo que la explicación es clara. Como hemos dicho, la jurisdicción va a ser específica y especial respecto a la ordinaria desde la Edad Media. Se quiere matizar y

recoger todos los supuestos, posibilidades, etc., de ahí que sean dos y no uno los títulos que se dedican a ello.

Este Proyecto de Código de Comercio elaborado por la Comisión especial fue entregado al Ministro de Hacienda en el mes de mayo de 1829 para que, posteriormente, se lo entregara al rey. Estaba organizado en 7 libros y 887 artículos y, han quedado dos copias del mismo que se encuentran en la Biblioteca Municipal de Guadalajara²³.

Pero lo que nació con la idea de elaborar un único Código de Comercio que unificara toda la legislación mercantil tardó un poco en llegar a buen puerto ya que, la Comisión elaboró un texto y Pedro Sainz de Andino elaboró otro texto distinto²⁴. Ambos textos normativos fueron llevados ante el rey Fernando VII en el mes de mayo de 1829 y éste eligió el de Sainz de Andino, que fue considerado mejor que el que había elaborado la Comisión nombrada para realizar tal cometido y, con base a él, el Código de Comercio fue promulgado por el rey Fernando VII el día 30 de mayo de 1829.

La finalidad de este código está recogida en su preámbulo, el cual establece: «por cuanto hallándose reducida la Jurisdicción mercantil en esta Monarquía a las ordenanzas particulares otorgadas a los Consulados para su organización y régimen interior, se carecía de leyes generales que determinasen las obligaciones y derechos que proceden de los actos de comercio, de lo cual resultaba grande confusión e incertidumbre, tanto para los mismos comerciantes, como para los Tribunales y Jueces que habían de dirimir las diferencias; y queriendo Yo poner término a males de tanta gravedad e interés, y dar al Comercio un sistema de legislación uniforme, completo y fundado sobre los principios inalterables de la justicia y las reglas seguras de la conveniencia del mismo Comercio, creé por mi soberana resolución de once de Enero de mil ochocientos veinte y ocho una Comisión especial compuesta de magistrados y juristas, y de personas versadas en las prácticas y usos mercantiles, para que meditasen, preparasen y me propusieran un proyecto de Código de Comercio: habiéndome presentado la Comisión sus trabajos, con vista de estos, y de la demás instrucción preparatoria con que de mi soberana orden se ha ilustrado y perfeccionado una obra tan grave, ardua e importante, he venido en decretar y decreto como ley universal para todos mis Reinos y Señoríos en materias y asuntos mercantiles el siguiente Código de Comercio»²⁵.

²³ RUBIO, *op. cit.*, pág. 113.

²⁴ Según Foucher, tanto el Proyecto de Código elaborado por la Comisión como el elaborado por Pedro Sainz de Andino estaban basados en principios idénticos.

El primero, tenía tendencia subjetiva, es decir, concebía el acto de comercio como aquel que era llevado a cabo por personas dedicadas a esa profesión, por lo que solo los comerciantes podían comparecer ante la jurisdicción mercantil especial. El segundo, incluía los pasos o los elementos de los procedimientos mercantiles, es decir, qué debían hacer, qué debían entregar, etc., los conceptuados como comerciantes.

Ibíd., págs. 114 a 116.

²⁵ Preámbulo del Código de Comercio de 1829.

<http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/codigoDeComercio1829.pdf>

Biblioteca de la Facultad de Derecho de Sevilla (Consultado el 8/10/2018).

No obstante, se vertieron numerosas críticas en torno a ese Código de Comercio de 1829 elaborado por Pedro Sainz de Andino ya que se decía que Pedro Sainz de Andino, su autor, había articulado el derecho mercantil en torno a la figura del comerciante, es decir, teniendo en cuenta un aspecto subjetivo. Sin embargo, Pedro Sainz de Andino no pretendía tal, no tuvo ello como objetivo al plantear su código sino que contrariamente articuló el derecho mercantil en torno al “derecho de los actos objetivos del comercio”, toda transacción, negocio, etc., que pudiera considerarse un acto de comercio, independientemente de quien la realizara.

Por último, la idea de Pedro Sainz de Andino respecto al Código de Comercio era «formar una jurisprudencia comercial fija, cierta, uniforme y general, es decir, unas ordenanzas generales de comercio terrestre y marítimo»²⁶. El proyecto se centraba más en el comercio marítimo (pues era el verdadero origen y núcleo del derecho mercantil). Como es lógico, ninguno de los dos textos se ocupaba del comercio aéreo, inexistente en aquella época.

2. 1. 2. Caracteres del Código de Comercio de 1829

En primer lugar, cabe destacar su aspecto objetivo, es decir, basa su aplicación en el hecho de que la actividad realizada sea un acto de comercio y no al sujeto que la realiza. Este aspecto se ve en su artículo nº 2: «los que hagan accidentalmente alguna operación de comercio terrestre, no serán considerados comerciantes para el efecto de gozar de las prerrogativas y beneficios que a estos están concedidos por razón de su profesión; sin perjuicio de quedar sujetos en cuanto a las controversias que ocurran sobre estas operaciones a las leyes y jurisdicción del comercio»²⁷. Esto es, no son comerciantes en sentido estricto, pero se les aplicarán las leyes mercantiles cuando realicen “actos de comercio”.

En segundo lugar y, en relación con el primer elemento, tenemos que decir que el Código de Comercio hace un listado de aquellas materias de las que tiene que ocuparse la jurisdicción mercantil (contratos mercantiles, comercio marítimo, quiebra, administración de justicia...), si bien hemos de señalar que no es un listado cerrado, ya que puede admitir cualquier variación del acto de comercio. Es por ello que no se entienden bien las críticas que recibía el Código elaborado por Pedro Sainz de Andino ya que dejaba muy claro que éste estaba basado en los actos objetivos del comercio y en toda la problemática con ellos relacionada.

²⁶ PETIT, C., *El Código de Comercio de Sainz de Andino (1829). Algunos antecedentes y bastantes críticas*, 2013, págs. 119 – 120.

²⁷ Código de Comercio de 1829.

<http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/codigoDeComercio1829.pdf>

Biblioteca de la Facultad de Derecho de Sevilla (Consultado el 10/10/2018).

2. 1. 3. *Contenido del Código de Comercio de 1829*

En este apartado vamos a hacer referencia a los libros y títulos que componen el Código, todo ello para obtener una idea más clara de qué, cómo, etc., queda regulada la materia. Lo considero interesante porque ello fue el germen y la base del Código de Comercio de 1885, código que con matizaciones y actualizaciones sigue vigente.

Libro I. De los Comerciantes y Agentes del Comercio.

Tiene 3 títulos y 233 artículos. El primero, define la figura del comerciante; el segundo, recoge las obligaciones comunes a todos los comerciantes; y el tercero, se refiere a las personas que intervienen en las operaciones mercantiles y sus obligaciones. En otras palabras, este título se encarga de establecer quiénes están amparados por esta legislación especial, por tener la consideración de “comerciante”.

Libro II. De los Contratos de Comercio en general, sus formas y efectos.

Está formado por 12 títulos y 348 artículos (va desde el 234 hasta el 582). El primero, recoge las disposiciones preliminares sobre la formación de las obligaciones en el ámbito mercantil; el segundo, se refiere a las compañías mercantiles; el tercero, regula las compraventas mercantiles; el cuarto, establece el régimen de las permutas; el quinto, se ocupa de los préstamos y de los réditos de las cosas prestables; el sexto, hace lo propio con los depósitos mercantiles; el séptimo, contiene la normativa referente a los afianzamientos mercantiles²⁸; el octavo, se refiere a los seguros de conducciones terrestres; el noveno, regula los contratos y las letras de cambio²⁹; el décimo, establece la normativa de las libranzas y de los vales o pagarés a la orden; el undécimo, recoge las disposiciones relativas a las cartas - órdenes de crédito; y el duodécimo, contempla la prescripción de los contratos mercantiles.

Libro III. Del Comercio marítimo.

Contiene 4 libros y 417 artículos (va desde el 583 hasta el 1000). El primero, se encarga de regular las naves (el elemento más importante cuando el comercio se realiza a través del mar y el origen de la normativa específica comercial/mercantil); el segundo, lo hace de las personas que intervienen en el comercio marítimo; el tercero, se ocupa de

²⁸ Para que un afianzamiento se considere mercantil es necesario que las partes que celebran el contrato sean comerciantes y que la fianza tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato mercantil (Código de Comercio de 1829, artículo 412).

²⁹ Para que una letra de cambio sea efectiva debe contener la designación de lugar, día, mes y año en que se libra la letra de cambio; la época en que debe ser pagada; el nombre y apellido de la persona a cuya orden se manda hacer el pago; la cantidad ha de pagar, etc. (Código de Comercio de 1829, artículo 426).

los contratos especiales del comercio marítimo; y el cuarto, establece la normativa en relación a los riesgos y los daños que pueden acontecer en el comercio marítimo.

Libro IV. De las quiebras.

Este libro está organizado en 12 títulos y 176 artículos (va desde el 1001 hasta el 1177). El primero, se ocupa del estado de la quiebra y sus diferentes clases; el segundo, de la declaración de quiebra; el tercero, de los efectos y retroacción de la declaración de quiebra; el cuarto, de las disposiciones consiguientes a la declaración de quiebra; el quinto, del nombramiento de los síndicos y sus funciones; el sexto, de la administración de la quiebra; el séptimo, del examen y del reconocimiento de los créditos contra la quiebra; el octavo, de la graduación y del pago de los acreedores; el noveno, de la calificación de la quiebra; el décimo, del convenio entre los acreedores y el quebrado; el undécimo, de la rehabilitación; y el duodécimo, de la cesión de bienes.

Libro V. De la administración de justicia en los negocios de comercio.

El último libro de este Código contiene 4 títulos y 41 artículos (va desde el 1178 hasta el 1219). El primero, se ocupa de los tribunales y los jueces que han de conocer de las causas de comercio; el segundo, de la organización de los tribunales de comercio; el tercero, se encarga de la competencia de los tribunales de comercio; y el cuarto, de los procedimientos judiciales en las causas de comercio.

Por último, se alude a la creación de un Código de Enjuiciamiento pero, mientras tanto, regirá una ley, ley que da paso al siguiente apartado de este Trabajo Fin de Grado. De hecho, el artículo 1219 del Código establece que, «en cuanto al orden de instrucción y sustanciación en todos los procedimientos e instancias que tienen lugar en las causas de comercio, se estará a lo que prescriba el Código de Enjuiciamiento, rigiendo entre tanto una ley provisional que promulgaré sobre esta materia».

2. 2. LEY DE 1830 O LEY DE ENJUICIAMIENTO SOBRE LOS NEGOCIOS Y LAS CAUSAS DE COMERCIO

Siguiendo el contenido del último artículo del Código de Comercio de 1829 se promulgó la ley que vamos a estudiar a continuación y que, en un principio, serviría de transición entre el Código de Comercio y el Código de Enjuiciamiento en lo referente a todo lo relacionado con el procedimiento mercantil.

Además, tal y como hemos mencionado antes, el Código de Comercio de 1829 de Sainz de Andino, se articuló en torno a la figura de los actos objetivos del comercio y, en consecuencia, se estableció que cualquier obligación o derecho que derivase de dichos actos, serían tratados en esta jurisdicción mercantil, con total independencia de si la persona que los realizaba era un comerciante o no.

2. 2. 1. Origen de la Ley de 1830 o Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio

Hasta principios del siglo XX podemos decir que de las cuestiones relativas al derecho mercantil y también de los problemas suscitados en el comercio, se ocupaba la jurisdicción mercantil. Sin embargo, a mediados del mismo siglo, la administración de justicia relativa al comercio (formada por los Tribunales Consulares y más tarde por la Junta de Comercio) entró en crisis. De esta forma, el Código de Comercio de 1829 intentó hacer más simple la jurisdicción en el ámbito mercantil. Y, continuando en esta línea el Código creó los Tribunales de Comercio.

En cuanto al origen del procedimiento mercantil en sentido actual, lo tenemos en el Código de Comercio de 1829, pues éste hizo referencia en su último artículo a la creación de una ley que regularía dicho procedimiento, concretamente en el 1219.

Y, de esta promesa, nació la Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio. En su exposición de motivos, S. M. el rey Fernando VII, dice lo siguiente: «por cuanto después de haber decretado en el Código que promulgué en treinta de mayo de mil ochocientos veinte y nueve las leyes que arreglan las relaciones del comercio y, determinan las formas y efectos de sus contratos, era necesario proveer al buen orden de su aplicación, estableciendo un sistema de procedimientos en que se concilien la celeridad de trámites y la economía de sus espensas con las formalidades indispensables para asegurar el acierto en las sentencias a cuya consecuencia me reservé en el artículo 1219 del Código promulgar una Ley que arreglase el orden de instrucción y sustanciación en todos los procedimientos e instancias que tienen lugar sobre los negocios de comercio, poniéndolo en ejecución, he venido a decretar y decreto, para que se guarde y observe en todos los Juzgados y Tribunales del Reino, la siguiente Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio»³⁰.

³⁰ Exposición de motivos de la Ley de 1830 en <http://fama2.us.es/fde/leyDeEnjuiciamientoComercio.pdf>

Fue Luis López Ballesteros, el responsable del Ministerio de Hacienda, el que notificó a Sainz de Andino, mediante Real Orden de 3 de junio de 1829, «que a la mayor brevedad posible proponga a S. M. una Ley provisional que fije el orden de instrucción y sustanciación de todos los procedimientos e instancias que tienen lugar en las causas de comercio»³¹.

Así pues, Sainz de Andino elevó su propuesta el 30 de junio de 1830 y en la exposición de motivos criticó duramente la situación anterior a la promulgación del Código de Comercio de 1829. En ella, se quejaba del modo de proceder de los diversos Consulados, pues cada uno tenía su modo de actuar y eso provocaba acumulación de diligencias, escritos liosos, muchísimos recursos y problemas de competencia entre los Juzgados y los Consulados, en definitiva, procesos bastante largos y muy costosos.

Todo ello contrasta con el principal objetivo que los comerciantes tuvieron desde los primeros tiempos y que también se plasma en la exposición de motivos de esa Ley, que no era otro que establecer un proceso rápido y sencillo para agilizar los procesos relativos al comercio, que serían resueltos por personas conocedoras de la materia, es decir, por comerciantes. No debemos olvidar que la celeridad era importante ya que había riesgos de grandes pérdidas por ejemplo si las transacciones eran sobre productos perecederos o si los barcos debían estar atracados o amarrados en el puerto pagando por cada día de estancia en éste.

La Ley de 1830, según su artículo 5, prohibía a las partes que adornasen sus alegatos incluyendo en los mismos citas doctrinales procedentes de otros autores y/o juristas relacionados con la materia objeto de controversia. La Ley de 1830 consideraba que no era obligatoria la intervención de abogados en los Tribunales de Comercio y pedía que los escritos fuesen claros y sencillos. Por último, señalar que esta Ley, de carácter provisional, estuvo vigente hasta que entró en vigor el Decreto de Unificación de Fueros de 1868³², que en el ámbito mercantil fue determinante.

³¹ LASSO GAITE, *op. cit.*, pág. 110.

³² El artículo 248 de la Constitución de 1812 dispone que, “en los negocios comunes, civiles y criminales no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas”. La diversidad de fueros dificultaba que aquel que debía ser juzgado lo fuese y que aquel que debía ver reparado su daño lo viene subsanado. El Decreto – Ley de 6 de diciembre de 1868, más conocido como Ley de Unificación de Fueros, firmado por el ministro de Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz acabó con la condición aforada de todos los clérigos en España y dio opiniones muy válidas de porqué era necesaria la unificación de fueros. El Título I del Decreto establece en su artículo 1. 8 que, “desde la publicación del presente decreto, la jurisdicción ordinaria será la única competente para conocer: de los negocios mercantiles”. *Revista Española de Derecho Canónico*, “Los Obispos ante la Ley de Unificación de Fueros (notas históricas al decreto de 6 de diciembre de 1868)”, 1973, volumen 29, nº 83, págs. 431 – 460. “La jurisdicción de Hacienda y la de Comercio son las únicas que desaparecen por completo. Ejercidas en segunda instancia por Tribunales de la ordinaria, no hay fundamento racional que justifique la existencia de Juzgados especiales para la primera, cuando la naturaleza, e índole de los asuntos mercantiles y de Hacienda no reclaman fuero privativo ni general enjuiciamiento propio. Por esta razón, de hoy en adelante los Jueces de partido serán los competentes para conocer de los negocios mercantiles, de los de Hacienda y de los delitos de contrabando y defraudación, que se perseguirán con arreglo a las leyes comunes y decreto de 20 de junio de 1852, desapareciendo en su consecuencia la irregularidad y anomalía que hasta ahora se notaban en la organización de las expresadas jurisdicciones”. Colección Legislativa de España, C, número 945.

2. 2. 2. Características de la Ley de 1830 o Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio

Además de las características mencionadas anteriormente (celeridad o sencillez), podemos decir que destaca, en primer lugar, la división entre el juicio ordinario y el de menor cuantía. El juicio ordinario comienza con una demanda y sigue con una respuesta o contestación a la misma por escrito. Después se practicarán las pruebas y se continúa con un escrito de conclusiones o alegatos y termina con una sentencia. La sentencia que da fin al juicio ordinario admite apelación ante la Audiencia.

El de menor cuantía es el juicio verbal. Se recoge en un acta y no cuenta con un recurso. Hasta los 1.000 reales conoce el Tribunal de Comercio, si no llega a los 500 reales, podrá conocer de estos asuntos, el Juzgado Ordinario.

En segundo lugar, también aparece en esta Ley el juicio ejecutivo, que regula el procedimiento ejecutivo propiamente dicho y el procedimiento de apremio.

El Título regula el procedimiento de quiebra en cinco apartados. El primero, se ocupa de la declaración de quiebra; el segundo, de la administración de la quiebra; el tercero, de los efectos de la retroacción de la quiebra; el cuarto, del examen, graduación y pago de los créditos contra la quiebra; el quinto, de la calificación de la quiebra y de la rehabilitación del quebrado. Coincide en mayor o menor medida con el Código de 1829.

Y en cuarto lugar, tenemos que decir que el primer texto que recoge la figura del arbitraje es el Código de Comercio de 1829, al hablar en su artículo 323, del arbitraje societario obligatorio. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio y la aparición de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 1855 nos encontramos con dos tipos de arbitrajes diferentes: uno, el mercantil, que se ocupa de los negocios y las causas de comercio y otro, el civil o común.

El mercantil se caracteriza por su poco formalismo y su rápida tramitación. Y el civil o común, lo hace por contener formas y trámites mucho más rigurosos que el anterior. No obstante, ambos arbitrajes tienen en común que son procesos voluntarios, es decir, optativos por las partes, que son las que deciden, en último término, someterse a un arbitraje para casos de futuras posibles controversias comerciales³³.

Por último, mencionar que, con la entrada en vigor del Decreto de Unificación de Fueros de 1868, se suprimió la jurisdicción mercantil y se derogó la Ley de 1830 o Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio, pasando a regular la Ley de Enjuiciamiento Civil la figura del arbitraje civil o común. También se ocupó esta Ley de regular los arbitrajes mercantiles pero de una manera que no satisfacía las especialidades o las circunstancias de la materia o del ámbito mercantil³⁴.

³³ OLIVENCIA RUIZ, M., *Ley de Arbitraje, cláusula estatutaria arbitral y anteproyecto de Código Mercantil*, Estudios sobre el futuro Código Mercantil, 2015, págs. 717 – 718.

³⁴ *Ibidem*.

Pero, a pesar del avance que pudo suponer la Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio de 1830, tenía un defecto fundamental, que era el de mantener dos jurisdicciones distintas, la mercantil en primera instancia y la ordinaria en instancias superiores.

2. 2. 3. Contenido de la Ley de 1830 o Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio

La Ley de 1830 o Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio, decretada, sancionada y promulgada el 24 de julio de 1830 por Real Orden, consta de 13 títulos y de 461 artículos.

Los títulos son los siguientes:

Título I. De la comparecencia ante los jueces avenidores.

Título II. Disposiciones comunes a todos los juicios sobre negocios de comercio.

Título III. De la recusación en los Tribunales de Comercio.

Título IV. Del orden de proceder en el juicio ordinario.

Título V. Del orden de proceder en las quiebras.

Título VI. Del juicio arbitral.

Título VII. Del procedimiento ejecutivo.

Título VIII. Del procedimiento de apremio.

Título IX. De los embargos provisionales.

Título X. De los terceros opositores en los procedimientos ejecutivos.

Título XI. De los recursos contra las sentencias en causas de comercio.

Título XII. Del procedimiento en negocios de menor cuantía.

Título XIII. De las competencias de jurisdicción en los negocios de comercio.

Esa dispersión, consecuencia de la pluralidad de tribunales y de jurisdicción, trató de solucionarse con la Ley de Unificación de Fueros de 1868.

2. 3. ACONTECIMIENTOS HASTA EL CÓDIGO DE COMERCIO DE 1885

2. 3. 1. Primer intento de reforma del Código de Comercio de 1829

El Decreto de 13 de junio de 1834³⁵ creó la primera Comisión apenas cinco años después de la entrada en vigor del Código de Comercio de 1829. El motivo por el cual la creación de esta Comisión tuvo lugar fue que el Decreto ya mencionado, consideraba de vital importancia que una Comisión examinase el Código de Comercio y propusiera las reformas que considerase adecuadas para mejorarlo y adaptarlo al momento actual, todo ello poniéndose de acuerdo con la Comisión encargada de redactar el Código Civil para que ambas obras fuesen elaboradas de la mejor forma posible, complementándose.

La sesión inaugural de la Comisión encargada de examinar el Código de 1829 aconteció el 1 de julio de 1834 y en ella, se acordó recabar todos los documentos que sirvieron para elaborar el Código de Comercio y pedir a los Tribunales de Comercio que elaborasen una memoria con los casos más controvertidos que hubiesen tenido. Una vez recabada toda la información posible, la Comisión se puso en marcha el 5 de noviembre de ese mismo año y empieza a revisar libro por libro, título por título y artículo por artículo, modificando todo lo que consideraba oportuno.

La Comisión dio cuenta de su trabajo en dos ocasiones; en la primera, enseñó los cambios realizados respecto de los tres primeros libros y en la segunda, los relativos a los dos últimos. Sin embargo, no podían empezar a redactar el nuevo Código porque la Comisión encargada de elaborar el Código Civil no les había dado ninguna contestación y no podían cumplir con los objetivos acordados en el Decreto de 13 de junio de 1834.

Esta Comisión celebró 52 sesiones en total, teniendo lugar la última el 17 de noviembre de 1835. La Comisión encargada de elaborar el Código Civil contestó a la Real Orden después de esa fecha, por lo que llegaba tarde.

Y finalmente, el 31 de mayo de 1836, el ministro de Gracia y Justicia comunica que, «siendo necesario dar una dirección conveniente a sus trabajos para que marchen a la par con los del Código Civil tan íntimamente enlazados entre sí, se ha servido mandar

³⁵ «Es tan íntima la conexión entre las leyes civiles que abrazan todas las relaciones sociales de los miembros de un Estado, y las peculiares de comercio, que apenas pueden señalarse otras diferencias que las nacidas de la celeridad, confianza y sencillez sobre que giran las operaciones mercantiles. Y dirigida ya mi atención hacia la reforma del Código Civil que ha de abrazar las reglas generales acerca de las personas, cosas y acciones; y siendo de necesidad poner el de Comercio en armonía con aquel, de modo que aparezca consecuente y homogéneo el cuerpo de la legislación española, he venido en mandar en nombre de mi excelsa Hija Doña Isabel II, que una comisión compuesta por D. Juan Gualberto González, D. Juan Álvarez Guerra, D. Ángel Fernández de los Ríos y D. Salustiano Olózaga, que desempeñará además las funciones de secretario, poniéndose de acuerdo con los encargados de redactar el Código Civil, examine el de Comercio, que rige en la actualidad, y me proponga las reformas o adiciones que estime convenientes para su mayor perfección».

Gaceta de Madrid, número 119, lunes 16 de junio de 1834.

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1834/119/A00521-00521.pdf>

que cesando desde luego esa Comisión, remita V. E. inmediatamente a esta Secretaría todos los papeles relativos y pertenecientes a ella»³⁶.

Además, el ministro de Marina, Comercio y Ultramar pidió al ministro de Gracia y Justicia, en 1836, que se le entregasen todos los documentos relativos al Código de Comercio de 1829 para poder abordarlos e intentar su propia elaboración ya que éste consideraba que él y su círculo, más que nadie, tenían especial interés en que dicho Código se reformase. No obstante, la Comisión encargada de elaborar un nuevo Código de Comercio fue suprimida y el proyecto que había elaborado no llegó a triunfar.

2. 3. 2. Segundo intento de reforma del Código de Comercio de 1829

El cambio de Gobierno que se produjo en 1837 vino acompañado de un nuevo intento por reformar el Código de Comercio. Tanto es así que, el ministro de Marina, Comercio y Ultramar habló en una de las sesiones del proyecto antes mencionado.

Ya en 1837, el Presidente del Gobierno, apoyado por el ministro de Marina, Comercio y Ultramar, establece la necesidad de crear una Comisión que revisase dicho proyecto. Esta Comisión tuvo su primera sesión el 1 de diciembre de 1837 y la última el 4 de mayo de 1838. Durante este periodo, recabaron todos los documentos relativos al Código de Comercio y modificaron todo aquello que consideraron oportuno.

Hubo numerosas discusiones acerca del Libro V del Código puesto que algún miembro de la Comisión estaba a favor de la supresión de los Tribunales de Comercio. No obstante, el Presidente de la misma estaba en contra de dicha abolición ya que creía que llevar ante los Tribunales Ordinarios asuntos del ámbito mercantil suponía dejar el contenido del Código de Comercio del 29 sin sentido alguno y se incluyó en ese trabajo.

Finalmente, podemos decir que se conservan varios ejemplares de las obras que contienen las modificaciones que se hicieron al Código de Comercio de 1829 o las diferencias más notables entre dicho Código y el Proyecto de Código elaborado por la Sección del Ministerio de Marina, Comercio y Ultramar.

Como ya hemos dicho anteriormente, el Código de Comercio debía realizarse de acuerdo con el Código Civil, por lo que estas elaboraciones, además de ser escrutadas por los Tribunales de Comercio para que diesen su opinión al respecto, quedaron en suspenso hasta que la Comisión procediera a la elaboración del Código Civil, código que no vería la luz hasta finales del siglo.

³⁶ LASSO GAITE, *op. cit.*, pág. 122.

2. 3. 3. Proyectos de la tercera Comisión (creada el 24 de octubre de 1838)

El 24 de octubre de 1838, mediante Real Decreto³⁷, se creó una tercera Comisión con el fin primordial de reformar parte del Código de Comercio de 1829, fin que apoyó el ministro de Marina, Comercio y Gobernación de Ultramar.

El motivo por el que se creó esta Comisión no fue otro que la falta de aprobación de los trabajos realizados por las Comisiones anteriores y por ello, en el preámbulo de este Decreto se establece la necesidad de elaborar una ley provisional que incluya los artículos que necesitaban de aclaraciones, rectificaciones o modificaciones y cuyo contenido estaría vigente hasta la entrada en vigor del nuevo Código de Comercio.

Sin embargo, esta Comisión fue cesada, mediante Real Orden de 26 de agosto de 1839, por no realizar su tarea tal y como esperaba el Gobierno.

2. 3. 4. Proyectos de la cuarta Comisión (creada el 26 de agosto de 1839)

Por una Real Orden de agosto de 1839 se crea una cuarta Comisión, con el objetivo de reformar los capítulos que más lo necesitasen. Este hecho lo promovió el Ministerio de Marina, Comercio y Ultramar, pues veía cercana la apertura de Cortes y quería que este Proyecto de Ley estuviera acabado antes de dicho acontecimiento.

Además, los Tribunales y las Juntas de Comercio de todo el reino coincidían en la opinión de que varios artículos y sobre todo, el Libro V del Código de Comercio, debían ser reformados en el menor periodo de tiempo posible.

Así pues, la Ley provisional que realizó esta Comisión constaba de 24 artículos, los cuales se referían, entre otras cosas, a los comerciantes, a las fianzas, a los contratos, a la responsabilidad de los socios, a las letras de cambio, etc. El último, contiene una lista con los artículos que debían quedar derogados en virtud de esta Ley.

El Proyecto de Ley provisional se sometió al escrutinio del Ministerio de Gracia y Justicia y al Tribunal Supremo. La conclusión a la que se llegó fue que ninguna de las dos instituciones estaba a favor de dicha reforma y que la modificación de los artículos citados en la Ley provisional podía esperar a la reforma del Código en su totalidad.

³⁷ «Convinando a los intereses del comercio que por una ley provisional se hagan en el Código vigente del ramo, sancionado en 30 de mayo de 1829, las alteraciones, aclaraciones y modificaciones que exigen las actuales instituciones, y que la experiencia ha acreditado ser necesarias para el buen despacho de los negocios mercantiles; y hallándome convencida por las razones que me habéis manifestado de que el medio más expedito de verificarlo con la urgencia que reclama la importancia del asunto, es el de presentar a las próximas Cortes un proyecto de ley que contenga las indicadas variaciones, la cual rija hasta la aprobación del nuevo Código mercantil, cuyo proyecto será también presentado; como Reina Regente Gobernadora del Reino durante la menor edad de mi excelsa Hija la Reina Doña Isabel II, he tenido a bien mandar que una comisión compuesta por Pedro de la Puente, Manuel Alonso de Viado, Antonio Guillermo Moreno, Francisco de Acebal y Arratia y Francisco López Olavarrieta, se dedique desde luego a la formación del referido proyecto de ley para el indicado objeto».

Gaceta de Madrid, número 1440, viernes 26 de octubre de 1838.

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1838/1440/A00001-00001.pdf>

Finalmente, el 19 de agosto de 1843, también mediante Real Orden³⁸, se creó la Comisión General de Codificación dividida en cuatro secciones (Código Civil, Código Penal, Procedimientos Civiles y Procedimientos Penales). El 31 de julio de 1846, las secciones quedaron reducidas a dos (una, para el Código Civil y los Procedimientos Civiles y otra, para el Código Penal). Estas secciones lograron elaborar los proyectos de Código Civil (1851), de Código Penal (1848) y de Ley de Enjuiciamiento Civil (1855).

2. 3. 5. Comisión encargada de revisar las Leyes Mercantiles

El 8 de agosto de 1855, por Real Decreto³⁹, Manuel Alonso Martínez crea una Comisión con el principal objetivo de revisar el Código de Comercio de 1829 y la Ley de Enjuiciamiento Mercantil de 1830, obras de gran importancia en el momento de su creación pero que debían adaptarse a los tiempos y cambios.

En esta línea, dicha Comisión elaboró varios trabajos:

- 1º. Proyecto de Ley y Reglamento sobre Compañías Mercantiles por Acciones.
- 2º. Proyecto de Código de Comercio (incompleto) por Pablo González Huebra.
- 3º. Proyecto de Ley Orgánica de los Tribunales de Comercio.
- 4º. Proyecto sobre el Procedimiento de Quiebra por Luis Díaz Pérez.
- 5º. Proyecto sobre Apremio Personal por Cirilo Álvarez Martínez.

³⁸ «Entre las muchas reformas que reclama imperiosamente el pueblo español, la de su legislación es acaso la más importante de todas: así lo siente el país, y así lo han conocido cuantos Gobiernos se han sucedido en el poder de muchos años a esta parte; y sin embargo, preocupado el ánimo de los gobernantes y de los cuerpos colegisladores con las amargas vicisitudes de la guerra civil y la agitación de las cuestiones políticas, poco se ha adelantando hasta ahora en la gran obra de la codificación: atraso lamentable y, que en gran parte se debe al sistema empleado en los trabajos preparatorios.

Convencido de esto el actual Gobierno, y deseando dotar cuanto antes a la nación de códigos claros, precisos, completos y acomodados a los modernos conocimientos, presentó el 18 de mayo último a las pasadas Cortes un proyecto de ley, como apéndice del presupuesto de Gracia y Justicia, pidiendo un crédito efectivo de 3.000 reales, destinados al pago del personal y material de una comisión general, encargada de la formación de los códigos, para la que podrían ser nombrados los magistrados en activo servicio que tuviera conveniente, reservándoles la propiedad de sus plazas, que en caso necesario serían servidas por magistrados interinos con el sueldo correspondiente».

Gaceta de Madrid, número 3255, domingo 20 de agosto de 1843.

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1843/3255/A00001-00002.pdf>

³⁹ «Atendiendo a lo que me ha expuesto mi Ministro de Fomento, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º. Se crea una comisión especial encargada de revisar el Código de Comercio de 1829 y la Ley de Enjuiciamiento de 24 de julio de 1830; y de proponer a mi Gobierno con toda la brevedad posible las alteraciones y reformas que convenga introducir en su texto.

Artículo 2º. Formarán esta comisión los individuos siguientes: D. Pedro Gómez de la Serna, D. Laureano Figuerola, D. Pascal Bayarri, D. Cirilo Álvarez Martínez, D. Luis Díaz Pérez, D. Ramón Martín de Eixalá, D. Antonio Guillermo Moreno, D. Domingo Villasante y D. Vicente Soto y Giner.

Artículo 3º. Los Tribunales, oficinas y corporaciones dependientes del Ministerio de Fomento evacuarán los informes que les pida la comisión, y facilitarán a la misma los datos y antecedentes que considere necesarios para el mejor desempeño de su cometido».

Gaceta de Madrid, número 951, viernes 10 de agosto de 1855.

<https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1855/951/A00001-00001.pdf>

Además, esta Comisión se encargó de redactar informes sobre temas como la autorización para establecer en España compañías extranjeras o sobre la mayor libertad para ser agentes de Bolsa y Corredores de Comercio.

Finalmente, la Comisión fue disuelta en septiembre de 1869 sin que ninguna de sus obras llegara a buen puerto.

2. 3. 6. Abolición de la Jurisdicción Especial y los Tribunales de Comercio

El 28 de julio de 1864, mediante Real Orden, el Ministro de Fomento solicitó a la Comisión anteriormente mencionada que elaborase un informe sobre la continuidad de la Jurisdicción Especial y los Tribunales de Comercio ya que, en las Cortes de 1856 se había discutido si era conveniente suprimir los Tribunales de Comercio subsistiendo un jurado especial de comerciantes para las cuestiones de hecho⁴⁰.

La opinión de la Comisión fue especialmente clara: se suprime o no se suprime la Jurisdicción Especial y los Tribunales de Comercio, pero nada de medias tintas, nada de la existencia de jurados especiales. La balanza se inclinó hacia la supresión de éstos.

Tres años después, en 1867, se volvió a discutir esta cuestión y, el 11 de abril de 1868 se acordó la reforma orgánica de los Tribunales de Comercio. Finalmente y, tras la Revolución de septiembre de 1868, tuvo lugar la unificación de jurisdicciones, lo que supuso la supresión absoluta de los Tribunales de Comercio. De hecho, el Gobierno provisional elaboró el Decreto de Unificación de Fueros, de 6 de diciembre de ese año. Así, este Decreto significó, entre otras cosas, la supresión de los Juzgados de Hacienda y Comercio, cuyos asuntos asumirían los Tribunales de Primera Instancia.

2. 3. 7. Legislación Mercantil entre 1830 y 1880

La existencia de lagunas y defectos en el Código de Comercio de 1829 y el avance del comercio por toda Europa llevaron a los intentos de reforma del Código que hemos señalado y a la elaboración de leyes especiales que regulasen algunas materias y que vendrían a completar el mencionado Código. Entre estas leyes de carácter especial se encuentran las siguientes:

- Ley de 28 de enero de 1848, sobre Compañías Mercantiles por Acciones y su correspondiente Reglamento, de 17 de febrero de 1849.
- Ley de 19 de octubre de 1869, General de Sociedades (como por ejemplo, las sociedades mercantiles, de crédito y de almacenes generales de depósito).
- Ley de 3 de junio de 1855, General de Ferrocarriles.
- Ley de 12 de diciembre de 1869, sobre la Quiebra de las Compañías de Ferrocarriles y Obras Públicas.

⁴⁰ LASSO GAITE, *op. cit.*, págs. 143 a 147.

2. 4. EL CÓDIGO DE COMERCIO DE 1885

El Código de Comercio de 1829 sentó las bases sobre las que se inspira nuestro Código de Comercio vigente, que data del año 1885, con las modificaciones oportunas realizadas para adaptarlo a las necesidades y al tiempo.

De hecho, el contenido del Código de Comercio de 1885 estuvo prácticamente intacto hasta mediados del siglo XX, a pesar de que se intentó reformar en numerosas ocasiones, como por ejemplo, en el año 1926, que se propuso reformar el Libro II, sin mucha suerte, hemos de decir. Además, a partir de los años 50 de ese mismo siglo, se procedió a la elaboración de unas leyes especiales que sustituyeron el contenido en ese ámbito del Código de Comercio, como por ejemplo, la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1953.

La Comisión General de Codificación modificó alguna parte del Código, especialmente, los Títulos II y III, relativos al Registro Mercantil y la contabilidad de los empresarios. Por todo ello, podemos decir que el motivo por el cual el Código de 1885 sigue vigente es que la Comisión General de Codificación se ha limitado a modernizar el contenido de dicho Código a través de unas normas especiales y a no incluir en el Código de Comercio esas modificaciones de tantísima importancia⁴¹.

2. 4. 1. Origen del Código de Comercio de 1885

Podemos decir que fueron varios los elementos que hicieron que la sociedad se planteara la necesidad de elaborar un nuevo Código de Comercio apenas cinco años después de la entrada en vigor del Código de Comercio de 1829. Entre ellos destacan el avance mercantil y despegue económico, el cambio político y la presencia de defectos en el código, así como la costumbre que se tenía en nuestro país de crear nuevas normas aunque no hicieran falta. Además, la creación de leyes sobre ciertas materias especiales hizo que lo regulado en el Código de 1829 quedase obsoleto y, finalmente, derogado por la entrada en vigor de un nuevo Código, el de 1885 y de unas leyes especiales⁴².

Tras la Revolución de 1868⁴³, que tenía como principal objetivo el liberalismo económico, el Decreto de 20 de septiembre de 1869, que disolvió la Comisión que había sido nombrada en 1855 para la creación o elaboración del Código de Comercio, estableció la urgente necesidad de crear otra Comisión para la redacción tanto de un nuevo Código de Comercio como de una Ley de Enjuiciamiento Mercantil, haciéndose eco de las necesidades que se habían detectado y plasmado en años precedentes.

⁴¹ BERCOVITZ, A., *Pasado, presente y perspectivas de la Codificación Mercantil*, Anuario de Historia del Derecho Español, Tomo LXXXII, 2012, págs. 69 – 70.

⁴² ESCUDERO, *op. cit.*, pág. 889.

⁴³ Tras su destierro en 1864, Juan Prim y Prats regresó a España, abandonó la Unión Liberal e ingresó en el Partido Progresista y con la ayuda de Mateo Sagasta, Ruiz Zorrilla, Serrano Bedoya y Bautista Topete, llegó a Cádiz. Mientras una parte del ejército se dirigía a Madrid, Prim conseguía las adhesiones de Andalucía, Cataluña y Levante. La “Revolución de 1868” ganó y dio lugar al Sexenio Democrático.
<https://espana.leyderecho.org/revolucion-de-1868/> (Consultado el 15/10/2018).

Es preciso señalar, dada su importancia, que dicho Decreto sentó las bases sobre las que debía versar el Código, como por ejemplo, la Base 1ª disponía que, el nuevo Código de Comercio no podía contener normativa contraria al contenido de la Constitución Española sobre la libertad de todos los españoles para celebrar contratos autónomamente. La Base 2ª pugnaba por la libre voluntad de las partes para establecer la forma, las obligaciones, la responsabilidad, etc., del contrato.

Y la Base 3ª establecía lo siguiente: «en consonancia con el espíritu de las bases anteriores deberá suprimirse todo monopolio, privilegio o exclusión para el ejercicio de las varias profesiones comerciales»⁴⁴.

La nueva Comisión estaba compuesta por personalidades como Pedro Gómez de la Serna (presidente), Laureano Figuerola, Cirilo Álvarez Martínez, Luis María Pastor, Manuel Alonso Martínez, Joaquín Sanromá, Francisco de Paula Canalejas (vocal) y Francisco Camps Pons (vocal secretario). La mencionada Comisión entregó su Proyecto de Código de Comercio al Gobierno de 1875 para que éste fuese estudiado y corregido por la Comisión General de Codificación. Sin embargo, la Comisión General estaba inmersa en otros proyectos y dejó pendiente esta tarea durante cinco largos años.

Como hemos mencionado anteriormente, la Comisión terminó el Proyecto de Código de Comercio en el año 1875, concretamente el día 6 de febrero. Constaba de 4 libros y 924 artículos. El primer libro se denominaba, “de los comerciantes y actos de comercio”; el segundo, “de los contratos de comercio”; el tercero, recibía el nombre “del comercio marítimo”; y el cuarto, “de las quiebras”.

- Comisión creada el 1 de marzo de 1881

El 30 de junio de 1879, el diputado Manuel Durán y Bas, presentó una propuesta de Ley ante el Congreso de los Diputados, la cual tenía varios objetivos, entre ellos, reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificar el Código de Comercio de 1829 e incorporar aquellas instituciones reguladas en leyes especiales y también, de los Tribunales de Comercio⁴⁵.

El principal propósito de Durán y Bas era, por tanto, presentar lo antes posible la reforma del Código de Comercio a las Cortes y para ello, además de apoyarse en los trabajos realizados por Comisiones anteriores pidió la creación de otra Comisión.

Y, tras dos años, en 1881, con la llegada de Alonso Martínez al Ministerio de Gracia y Justicia, nació el Real Decreto de 1 de marzo de 1881, el cual crea la Comisión que se encargaría de reformar el Código de Comercio de 1829 y hace un repaso muy detallado de las Comisiones nombradas anteriormente y, también, de sus trabajos.

⁴⁴ LASSO GAITE, *op. cit.*, pág. 154.

⁴⁵ *Ibíd.*, pág. 160.

Una vez nombrada la Comisión se procedió a la modificación del Código, libro por libro, título por título y artículo por artículo. Además de las reformas realizadas por los miembros de la Comisión, el proyecto de Código de Comercio, una vez acabado, recibió opiniones de todo tipo, como las del Círculo de la Unión Mercantil.

En julio de 1885, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado nombraron a las personas de sus respectivas cámaras que iban a formar parte de la Comisión Mixta que se encargaría de estudiar, discutir y aprobar el Código de Comercio de 1885 (Alonso Martínez fue nombrado presidente y Luis Díaz Cobeña secretario). Ese mismo mes, la Comisión Mixta acordó someter a aprobación el Proyecto de Código de Comercio y los artículos que habían sido modificados (por ejemplo, el 35, 68, 70, etc.).

El Proyecto de Código de Comercio entró en el Congreso y tras su aprobación, se llevó ante el Senado. Después, la Comisión Mixta acordó someter a votación dicho Proyecto y finalmente, el ministro de Gracia y Justicia autorizó la publicación del mismo, el cual fue promulgado y publicado el 22 de agosto de 1885, a pesar de que entraría en vigor el 1 de enero del año siguiente, es decir, en 1886.

Como curiosidad, añadir que el Código de Comercio de 1885 estuvo vigente en Cuba y Puerto Rico. También se extendió a Filipinas, en ambos casos mediante sendos Reales Decretos.

2. 4. 2. Caracteres del Código de Comercio de 1885

Como ya hemos mencionado anteriormente, el Código de Comercio de 1885, es una actualización del Código de Comercio de 1829, ideado y elaborado por Sainz de Andino, adaptándose e incluyendo, en ocasiones, la normativa surgida con posterioridad al Código de Comercio y también haciendo especial hincapié en aquellas materias no suficientemente desarrolladas hasta ese momento.

La principal característica que define al Código de Comercio de 1885 es su total desconexión o separación de la Codificación del Derecho Civil (a pesar de los intentos de que se actuara al unísono en esas ramas del Derecho, como establecía el Real Decreto de 16 de junio de 1834) y, por consiguiente, podemos decir que obvia totalmente la unificación del Derecho Privado en España. Esta idea contrasta con la que contiene el Informe COMAS7AZCARATE7SILVELA, el cual establece que, «en el progreso del derecho la separación histórica entre estas dos ramas está llamada a desaparecer, si bien, el estado actual de cultura no consiente formar un solo Código»⁴⁶.

⁴⁶ EIZAGUIRRE, J. M., *El derecho mercantil en la codificación del siglo XIX*, pág. 99.

2. 4. 3. *Contenido del Código de Comercio de 1885*

Es preciso señalar aquí, igual que hemos hecho con el Código de Comercio de 1829 y la Ley de 1830 o Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio, los distintos libros que forman el Código y resaltar aquello que consideramos más importante.

Pero, antes de empezar a desarrollar el contenido del Código de Comercio de 1885, tenemos que decir que, a diferencia del Código del 29, que se estructuraba en 5 libros y 1219 artículos, el de 1885 contenía al promulgarse 4 libros y 955 artículos (alguno de ellos está ya derogado, otros modificados...).

Libro I. De los Comerciantes y del comercio en general.

Está compuesto por 6 títulos y 115 artículos. El primero, define el concepto de comerciante y acto de comercio; el segundo, se ocupa de regular el Registro Mercantil; el tercero, la contabilidad de los empresarios; el cuarto, las disposiciones generales de los contratos de comercio; el quinto, los lugares y las casas de contratación mercantil; y el sexto, los agentes mediadores del comercio y de sus respectivas obligaciones.

El concepto de comerciante no cambia, es el mismo que recoge el otro Código de Comercio. En cuanto al Registro Mercantil, el Código actual establece una lista de las personas que tienen que inscribirse en dicho registro e indica qué lugares y bajo qué autoridades se encuentran dichos registros. La valoración que se otorga al Registro Mercantil es importante puesto que su contenido se presume exacto y válido.

Respecto a la contabilidad de los empresarios, decía que ésta incluye sus libros, las cuentas anuales y la presentación de las cuentas de los grupos de sociedades. Los empresarios también tendrán que llevar una contabilidad ordenada y adecuada a la actividad que la empresa se dedique y llevar los libros al Registro.

Los contratos mercantiles, así como sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretaciones..., se regirán por lo contenido en el presente Código y, en caso de que no se regule en éste algún elemento, por las reglas generales de Derecho Común⁴⁷.

Las dos primeras secciones del Título V, relativas a las Bolsas de Comercio y a las operaciones de Bolsa, están totalmente derogadas. La tercera, hace referencia a los demás lugares públicos de contratación, es decir: ferias, mercados y tiendas.

En relación a los agentes mediadores del comercio, contiene normas comunes a los mismos y también se ocupa de los corredores colegiados de comercio y de los corredores colegiados intérpretes de buques, para lo que es necesario, además de reunir los requisitos de un corredor colegiado normal, hablar dos lenguas, por ejemplo.

⁴⁷ Código de Comercio de 1885, artículos 50 a 63.
Boletín Oficial del Estado (BOE, núm. 289, de 16 de octubre de 1885).

Comparación entre el Código de Comercio de 1829 y de 1885

El Título I de ambos Códigos se refiere al concepto de comerciante y al de acto de comercio. Tanto uno como otro, entienden que comerciante es aquella persona que, teniendo capacidad legal para ejercitar el comercio, se dedica a ello de forma habitual.

En cambio, el Código de Comercio de 1829, regula, en su Título II, el Registro Mercantil y las obligaciones comunes a todos los empresarios, mientras que, el Código de Comercio de 1885 lo hace en dos Títulos diferentes, el II y III. Este último contiene una más que amplia regulación de las cuentas anuales y del concepto de balance.

El Título III del Código de Comercio de 1829 recoge la figura de los corredores, comisionistas, factores, mancebos y portadores y, el Código de Comercio de 1885 se refiere a corredores, comisionistas, factores, dependientes y mancebos, en su Libro II.

Lo que es el Título V del Código de Comercio de 1885, relativo a disposiciones generales de los contratos de comercio, es el Libro II del Código de Comercio de 1829. El segundo no contiene normativa acerca de los lugares públicos de contratación.

Por último, tenemos que decir que el Código de Comercio de 1829 tiene, en su Libro I, 233 artículos, mientras que el Código de Comercio de 1885, tan solo consta de 115 artículos.

Libro II. De los contratos especiales del comercio.

Este Libro contiene 13 títulos y 450 artículos, convirtiéndose así, en el Libro más extenso de este Código. El primer título, se ocupa de las compañías mercantiles; el segundo, de las cuentas en participación; el tercero, de la comisión mercantil; el cuarto, del depósito mercantil; el quinto, de los préstamos mercantiles; el sexto, de la compra y venta y permuta mercantiles y de la transferencia de créditos no endosables; el séptimo, del contrato mercantil de transporte terrestre (está derogado); el octavo, del contrato de seguro (está derogado); el noveno, de los afianzamientos mercantiles; el décimo, del contrato y de las letras de cambio (está derogado); el undécimo, de las libranzas, vales y pagarés a la orden y de los mandatos de pago llamados cheques (está derogado); el duodécimo, de los efectos al portador y de la falsedad, robo, hurto o extravío de los mismos; y el decimotercero, se encarga de las cartas – órdenes de crédito.

El Título I, referente a las compañías mercantiles es muy extenso y está formado por 13 secciones: la primera, de la constitución de las compañías y de sus clases; la segunda, de las compañías colectivas; la tercera, de las compañías en comandita⁴⁸; la cuarta, de las sociedades en comandita por acciones (está derogada); la quinta, de las acciones (solo está en vigor un único artículo); la sexta, de los derechos y obligaciones de los socios; la séptima, de las reglas especiales de las compañías de crédito; la octava,

⁴⁸ La sociedad o compañía en comandita se caracteriza porque la responsabilidad que afecta a los socios se limita a los fondos de su aportación a la sociedad (Código de Comercio de 1885, artículos 145 a 150).

de los bancos de emisión y de descuento; la novena, de las compañías de ferrocarriles y demás obras públicas; la décima, de las compañías de almacenes generales de depósito; la undécima, de las compañías o los bancos de crédito territorial; la duodécima, de las reglas para los bancos y sociedades agrícolas; y la decimotercera, se encarga de regular el término y también la liquidación de las compañías mercantiles en general.

El contrato de comisión mercantil es aquel que tiene como objetivo concertar un negocio de carácter mercantil por cuenta ajena, siempre que alguno de los contratantes tenga la condición legal de comerciante. El Título incluye información acerca de los comisionistas y también de los factores, de los dependientes y de los mancebos.

En cuanto al depósito mercantil, establece los requisitos que éste debe cumplir para que se considere mercantil, por ejemplo, es necesario que el depositario, al menos, sea comerciante o que, la cosa depositada sea objeto de comercio. También establece las obligaciones del depositario y qué hacer con aquellos depósitos que generen intereses.

En lo referente al préstamo mercantil, el presente Título se encarga de regular las bases del mismo, es decir, en qué consiste, cuáles son los derechos y las obligaciones de acreedores y de deudores, etc. Además, incluye los préstamos con garantías de valores.

Por todos es sabido que una compraventa es un intercambio de cosa por dinero pero, ¿qué es una compraventa mercantil? Aquella compraventa de cosas muebles para su posterior reventa, ya sea en la misma forma o de otra diferente, con ánimo de lucrarse en dicha reventa⁴⁹. Este Título también regula la figura de la permuta (el intercambio de cosa por cosa), pero se limita a decir que se rige por las normas de la compraventa.

Tanto el Título VII, relativo al contrato mercantil de transporte terrestre, como el Título VIII, referente al contrato de seguro, se encuentran totalmente derogados.

De los afianzamientos mercantiles poco dice ya que le dedica apenas 4 artículos. No obstante, lo primero que hace es definirlo y lo hace disponiendo que «será reputado mercantil todo afianzamiento que tuviere por objeto asegurar el cumplimiento de un contrato mercantil, aun cuando el fiador no sea comerciante»⁵⁰.

El Título X, que se refiere al contrato y a las letras de cambio y el Título XI, que lo hace de las libranzas, vales y pagarés a la orden, así como de los mandatos de pago llamados cheques, están derogados, un total de 100 artículos.

En cuanto a los efectos al portador y de la falsedad, robo, hurto o extravío de los mismos lo hace en dos apartados: en el primero, regula los efectos al portador y en el segundo, el robo, hurto o extravío de los documentos de crédito y efectos al portador, en cuyo caso, el propietario desposeído podrá acudir ante el Juez o Tribunal competente.

Y por último, este Libro se ocupa de las cartas-órdenes de crédito. Pero, ¿qué se entiende por carta-orden de crédito? La expedida de comerciante a comerciante o la que

⁴⁹ Código de Comercio de 1885, artículo 325.

⁵⁰ Código de Comercio de 1885, artículo 439.

se extiende para atender a una operación mercantil. Además, hace referencia a aquellos requisitos que deben reunir y a los derechos y obligaciones, de quien la da y la recibe.

Comparación entre el Código de Comercio de 1829 y de 1885

Como hemos mencionado anteriormente, el Libro II del Código de Comercio de 1829 recoge las disposiciones generales de los contratos de comercio. Pero, además, se encarga de regular los diferentes tipos de compañías mercantiles, lo cual, el Código de Comercio de 1885 lo hace en el Título I de su Libro II, pero mucho más desplegado.

Ambos Libros desarrollan las cuentas en participación, pero también la compra y venta y la permuta mercantil, así como los derechos y las obligaciones que hacen de las mismas y la transferencia de créditos no endosables, aunque en distintos Títulos. Ambos Libros se hacen cargo de los depósitos, los afianzamientos y los préstamos mercantiles.

Por el contrario, el Código de Comercio de 1829 regula el contrato mercantil de transporte terrestre y el contrato de seguro pero, el Código de Comercio de 1885 no lo hace, pues ambas figuras están derogadas. Lo mismo ocurre con el contrato y las letras de cambio y con las libranzas, vales y pagarés a la orden, así como con los mandatos de pago llamados cheque, que en el último Código no se encuentran, para nada, reguladas. Pero sí están reguladas en la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque.

Además, el Código de 1885, incluye los efectos al portador y qué hacer en caso de robo, hurto o extravío de los documentos de créditos y efectos al portador. Y, por último, ambos Códigos, contienen cierta normativa de las cartas – órdenes de crédito.

Libro III. Del comercio marítimo.

Los artículos de este Libro, 269, se encuentran derogados ya que, parte de su contenido está regulado en la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima.

Libro IV. De la suspensión de pagos, de las quiebras y de las prescripciones.

Los artículos del Título I, relativos a la suspensión de pagos y a la quiebra, están derogados. Los artículos del Título II hablan de la prescripción; de la responsabilidad de los agentes de Bolsa; corredores de comercio o intérpretes de buques; de las acciones que tiene un socio contra la sociedad o viceversa; de las acciones procedentes de letras de cambio, de libranzas, de pagarés, de cheques o talones y demás documentos de giro.

El Título III está formado por una disposición general, la cual establece que, «en los casos de guerra, epidemia oficialmente declarada o revolución, el Gobierno podrá, acordándolo en Consejo de Ministros y dando cuenta a las Cortes, suspender la acción

de los plazos señalados por este Código para los efectos de las operaciones mercantiles, determinando los puntos o plazas donde se estime conveniente la suspensión»⁵¹.

Comparación entre el Código de Comercio de 1829 y de 1885

El Libro IV de ambos Códigos se encarga de regular el proceso de la quiebra, pero lo hacen de una forma muy diferente. Por un lado, el Código de Comercio de 1829, se ocupa de aspectos como el estado de la quiebra y sus clases, de la declaración de la quiebra, de los efectos y la retroacción de la declaración de la quiebra, de las actuaciones que se tienen que llevar a cabo con posterioridad a dicha declaración, del nombramiento de los síndicos, del posible convenio entre los acreedores y el quebrado, de la rehabilitación de este último, etc.

Por otro lado, el Código de Comercio de 1885, solo habla de la suspensión de pagos y de la quiebra en general y de las prescripciones (mínimamente ya que parte de este articulado se encuentra derogado).

Y además, contiene una disposición general relativa a las situaciones de guerra, epidemia oficialmente declarada o revolución. En estos casos, el Gobierno podrá suspender la acción de los plazos señalados por este Código para los efectos de las operaciones mercantiles cuando ésta no haya de ser general en todo el Reino, siempre que se haya acordado en el Consejo de Ministros y se haya notificado a las Cortes⁵².

Libro V.

El Libro V del Código de Comercio de 1829, relativo a la administración de justicia en los negocios de comercio, no tiene correspondencia en el Código de 1885.

⁵¹ Código de Comercio de 1885, artículo 955.

⁵² *Ibídem*.

- Ejemplos de actuaciones en procesos de quiebra

En este apartado me gustaría hablar, de forma muy breve, de dos noticias que han suscitado mi interés y en las que podemos ver, a groso modo, la quiebra.

- El titular de la primera es el siguiente: «el fin de la gran juguetera, Toy's 'R' Us, cierra hoy todas sus tiendas en EEUU» con la consiguiente clausura de más de 700 locales alrededor de todo el país y el despido de miles de empleados.

Toy's 'R' Us se declaró en quiebra a mediados de marzo de 2018 al no ser capaz de hacer frente a sus principales competidores: Amazon, Walmart y Target. Hubo un intento de compra por parte de Issac Larian, creador de muñecas Bratz pero no se aceptó pues la cantidad que éste ofreció estaba por debajo del valor de liquidación.

No obstante, la conocida juguetera ya se había declarado en bancarrota en otoño del año anterior con unas deudas que ascendían a 5000 millones. Y, para hacer frente a dichas deudas, estaba previsto que tuviera lugar una subasta en la que se ofrecerían las marcas registradas por la compañía y los dominios que tuviera en Internet⁵³.

- La segunda noticia recibe este título: «la naviera mexicana Oceanografía sale de la quiebra bajo la sombra de un fraude millonario». Ya desde el año 2014, la naviera, que ofrecía diversos servicios de transporte y reparación de pozos, estaba bajo control del gobierno mexicano tras declararse en quiebra en uno de los casos más sonados de fraude en México. Era la Crónica de una muerte anunciada⁵⁴.

Citigroup acusó a la naviera de pedir créditos a su filial Banamex a través de varias facturas falsas para realizar supuestos trabajos para la petrolera. No obstante, tras duros años de litigios e investigaciones, en las que se puso en el punto de mira a otras empresas de varios países, la empresa naviera ya no se encuentra en un concurso y ha sido puesta en manos de su dueño, Amado Yáñez. Todo ello, ha venido facilitado porque para poder hacer frente al pago de las deudas que tenía la empresa y también reactivar las operaciones mercantiles que la misma desarrollaba regularmente, los acreedores han pactado renunciar al 90% de sus créditos⁵⁵.

⁵³ El País Online (Consultado el 21/10/2018).

https://elpais.com/economia/2018/06/29/actualidad/1530271662_348672.html

⁵⁴ Como titulara Gabriel García Márquez a una de sus obras, solo que esta vez, la muerte no era física, sino financiera.

⁵⁵ El País Online (Consultado el 21/10/2018).

https://elpais.com/internacional/2018/02/14/mexico/1518630301_024756.html

Existen múltiples sentencias⁵⁶ que tienen como tema principal la quiebra. Sería muy prolijo y fuera del objeto de este Trabajo Fin de Grado ocuparme de ellos, por eso, he seleccionado tres que me han parecido interesantes ya que sus protagonistas incurren en quiebra y las consecuencias de esta calificación son varias.

- STS 452/2002, de 15 de marzo de 2002.

El querellado Everardo, con dirección X de la sociedad comercial Herráez, S. L., se dedica a la compra y venta de cereales varios y realizó, desde la fecha en que se constituyó dicha sociedad hasta diciembre de 1996 (cuando se declaró en suspensión de pagos), una serie de operaciones comerciales (compra y venta de inmuebles).

Esta práctica terminó en la celebración de una Junta General de Socios y en la siguiente suspensión de pagos ya que no se podía hacer frente al pago de trabajadores, acreedores, etc. Posteriormente, se tuvo que declarar la insolvencia definitiva.

La Audiencia de Instancia condena a Everardo, como autor responsable de un delito de insolvencia punible y otro de falsedad, a una serie de años y cantidades.

- STS 612/2006, de 2 de junio de 2006.

El acusado, Valentín, era administrador de la sociedad quebrada, desde su origen hasta la crisis concursal, motivo por el cual, Valentín decidió ocultar en lugares distintos al de su sede los elementos patrimoniales de que disponía, no existiendo contabilidad ordenada y adecuada.

Es por ello que la Audiencia de Instancia condenó a Valentín como autor de un delito de insolvencia punible, con inhabilitación del derecho de sufragio pasivo.

- STS 252/2004, de 4 de marzo de 2004.

El acusado, Ernesto, era el socio mayoritario de una sociedad y urdió, elaboró y ejecutó un plan con el principal objetivo de lucrarse, en perjuicio de sus acreedores, lo que hizo que la sociedad acabara en un proceso de quiebra.

Es por ello que la Audiencia de Instancia condenó a Ernesto como autor de un delito de insolvencia punible por quiebra fraudulenta (artículo 260 del Código Penal).

⁵⁶ CENDOJ, Buscador del Sistema de Jurisprudencia, Poder Judicial.
<http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>

3. CONCLUSIONES

Con el presente Trabajo Fin de Grado he realizado un breve recorrido histórico jurídico del tráfico mercantil, haciendo especial hincapié en los diferentes conceptos de código y codificación a lo largo de la historia y también en los hitos más importantes de la Codificación Mercantil, como por ejemplo, la elaboración del Código de Comercio de 1829, la Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio de 1830 y el Código de Comercio de 1885.

En un principio, las reglas o normas que regulaban las transacciones mercantiles o comerciales se transmitían de forma oral, de padres a hijos. Muy pronto, los asuntos mercantiles fueron objeto de regulación específica y jurisdicción diferente a la ordinaria. Con el paso del tiempo y el avance de la sociedad, empezaron a elaborarse los primeros textos normativos, pero existía un problema grave, su gran número y variedad pues cada lugar tenía casi sus propias reglas. Más adelante y debido, en parte, al desarrollo económico, en parte, al progreso de los medios de transporte a través de los cuales tenían lugar las diferentes transacciones mercantiles (tierra y sobre todo, mar), entre otros motivos, se hizo evidente que la sociedad necesitaba regirse por unas normas que fuesen comunes a todos los Tribunales y a todas las personas que realizasen actos de comercio.

De esta necesidad surgió el fenómeno de la Codificación Mercantil. El primer hito al que hemos hecho referencia en este Trabajo es el Código de Comercio de 1829. Su impulso vino dado por el artículo 258 de la Constitución de Cádiz de 1812, que estableció la obligación de crear un único Código de Comercio para toda la Monarquía. Dicha Constitución ya recogía la necesidad de elaborar un único Código de Comercio para todo el reino, pero no fue hasta varios años después que este artículo llegó a materializarse pues la vuelta de Fernando VII en 1814 dejó sin efecto todo lo anterior, hasta el trienio liberal (1820 - 1823), cuando se retoma dicha labor.

Entiendo que el Código de Comercio de 1829 es de vital relevancia en la historia jurídica y en el ámbito mercantil ya que es el acontecimiento que marca el comienzo de una regulación o normativa mercantil en sentido estricto, aunque ya habían existido otras legislaciones. Y, como consecuencia de ser el primer gran código mercantil, podemos decir que se caracteriza por ser largo y demasiado minucioso, ya que pretende regular cualquier tipo de relación comercial. Pero, a veces, ese afán por regular todo, únicamente trae problemas a la hora de aplicar las normas, puesto que habrá varias de ellas que regulen aspectos iguales o parecidos.

La segunda gran obra a mencionar no es un Código, sino una Ley, la Ley de 1830 o Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio y como su propio nombre indica, se encarga de regular los procedimientos relativos a los negocios y a las causas de comercio. Es una Ley que pretende hacer más sencillo el proceso mercantil y suprimir del Código de Comercio de 1829 los artículos relativos a este procedimiento, complementándolo y haciendo más fácil su comprensión y aplicación.

Por último, nos encontramos con el Código de Comercio de 1885, que no deja de ser una actualización del Código de 1829. Pasaron 56 años entre la entrada en vigor de uno y otro Código y, en este periodo de tiempo, varios juristas y personas importantes de la época en el ámbito mercantil, vieron necesaria, en varias ocasiones, la reforma del Código de Comercio de 1829, puesto que creían que era manifiestamente mejorable. Además, en estos 56 años, se habían creado leyes especiales de materias en él reguladas, así que lo lógico era poner al día toda esa regulación.

En mi opinión y a modo de conclusión, puedo decir que la Codificación Mercantil fue un fenómeno total y completamente necesario. El derecho tradicional o consuetudinario podía estar bien en la sociedad de los siglos XV – XVI, que no tenía el material o los conocimientos necesarios para plasmar estas ideas o normas en papel.

Pero, un vez que se ha producido un avance en la sociedad a nivel global y con global me refiero al comercio, a la sociedad como conjunto, a la complejidad de las transacciones mercantiles, etc., fue necesario la elaboración de un código que recogiera toda la información relativa al comercio, a los comerciantes, a los tipos de transacción mercantil, a las consecuencias jurídicas en caso de un incumplimiento contractual, etc.

Es por ello que, considero al artículo 258 de la Constitución de Cádiz de 1812, como el gran impulso a la hora de elaborar el Código de Comercio de 1829. Un código muy completo y complejo, producto de la situación del momento en el que se realizó y que, en ocasiones y, casi desde su promulgación, encontró dificultades de aplicación.

De ahí que posteriormente se elaborase una Ley que vino a completar el enjuiciamiento de los negocios y las causas de comercio y también a hacer más sencillo dicho Código. Más tarde, fue necesaria la elaboración de otro Código Mercantil que se adaptase a los nuevos tiempos y que suprimiese toda la norma o legislación que había sido tratada en una ley especial. Y aunque costó tiempo y muchos intentos por parte de numerosas personalidades y comisiones, el nuevo Código de Comercio se promulgó en el año 1885, que es el que continúa vigente en la actualidad, con muchas menos materias que el anterior ya que muchos de los aspectos que éste normativizaba, se encuentran hoy en día regulados en diferentes leyes especiales relativas únicamente a estos temas.

El proceso de Codificación Mercantil fue un proceso largo y complejo pero que ha sido muy importante en el día a día de aquellas personas que se han dedicado y se dedican al comercio ya que saben a ciencia cierta porqué normas se rigen y que derecho se les aplica en la realización de las transacciones mercantiles, mucho más flexibles y seguras gracias a la evolución histórico – jurídica del Derecho Mercantil que hemos analizado y/o estudiado.

4. BIBLIOGRAFIA

Bercovitz, A., *Pasado, presente y perspectivas de la Codificación Mercantil*, Anuario de Historia del Derecho Español, Tomo LXXXII, 2012.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, *Estatuto de Bayona de 1808 (6 de julio de 1808)*, versión electrónica.

Caroni, P., *Lecciones de Historia de la Codificación*, edición de Adela Mora Cañada y Manuel Martínez Neira, Universidad Carlos III, Madrid, 2013, pág. 196.

CENDOJ, Centro de Documentación Judicial, Buscador de Sistema de Jurisprudencia, Poder Judicial, versión electrónica.

Código de Comercio de 1829, Biblioteca de la Facultad de Derecho de Sevilla, Código de Comercio, decretado, sancionado y promulgado el 30 de mayo de 1829, edición oficial, de orden del rey nuestro señor, en la imprenta real.

Código de Comercio de 1885, Boletín Oficial del Estado, Ministerio de Gracia y Justicia, núm. 289, de 16 de octubre de 1885, última modificación el 25/11/2017.

Congreso de los Diputados, Historia y Normas, *Constitución de Cádiz de 1812*, Constitución Política de la Monarquía Española, versión electrónica.

Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias. Serie histórica. Sesión del día 9 de diciembre de 1810. Número 74, pág. 153.

Eizaguirre, J. M^a., *El derecho mercantil en la codificación del siglo XIX*, 1988.

El País, versión electrónica.

Escudero, J. A., *Curso de Historia del Derecho: Fuentes e Instituciones Político Administrativas*, tercera edición, Madrid, 2003.

Floristán Imízcoz, A., *Adaptaciones divergentes: las Cortes de Navarra y los États de Navarre (siglos XV - XVIII)*, págs. 178 a 188.

Gaceta de Madrid, versión electrónica.

Historia de España, Las reformas de 1827 – 1829, versión electrónica, 2014.

Iñesta Pastor, E., *La Comisión General de Codificación (1843 - 1997). De la Codificación Moderna a la Descodificación Contemporánea*, 2013.

La Parra López, E., *Privilegios estamentales y deforma del clero en la crisis del Antiguo Régimen. (La jerarquía de la diócesis de Orihuela ante la convocatoria de las Cortes de Cádiz)*, pág. 223.

Lasso Gaité, J. F., *Crónica de la Codificación Española (Codificación Mercantil 6)*, Ministerio de Justicia, Comisión General de Codificación, Madrid, 1998.

Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y las Causas de Comercio, Biblioteca de la Facultad de Derecho de Sevilla, Ley decretada, sancionada y promulgada el 24 de julio de 1830, edición oficial, de real orden, en la oficina de D. León Amarita, 1830.

Nueva Enciclopedia del Mundo (la primera Enciclopedia Informatizada en España por el Instituto Lexicográfico Durvan), Bilbao.

Olivencia Ruiz, M., *Ley de Arbitraje, cláusula estatutaria arbitral y anteproyecto de Código Mercantil*, Estudios sobre el futuro Código Mercantil, 2015.

Petit, C., *El Código de Comercio de Sainz de Andino (1829). Algunos antecedentes y bastantes críticas*, 2013.

Real Academia de la Lengua Española, versión electrónica.

Real Academia de la Historia, versión electrónica.

Revista Española de Derecho Canónico, 1973, volumen 29, nº 83, págs. 431 - 460, Los Obispos ante la Unificación de Fueros (notas históricas al decreto de 1868).

Rubio, J., *Sainz de Andino y la Codificación Mercantil*, Madrid, 1950.

Tomás y Valiente, F., *Manual de Historia del Derecho Español*, cuarta edición, Editorial Tecnos, Madrid, 1983.